



Consejo de Seguridad

Distr. general
21 de agosto de 2015
Español
Original: inglés

Carta de fecha 21 de agosto de 2015 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) del Consejo de Seguridad

Los miembros del Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) tienen el honor de transmitir por la presente el informe provisional sobre su labor, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 18 d) de la resolución 2206 (2015).

El informe que se adjunta se presentó al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) el 31 de julio de 2015 y fue examinado por este el 20 de agosto de 2015.

El Grupo de Expertos agradecería que la presente carta y su anexo se señalara a la atención de los miembros del Consejo de Seguridad y se publicara como documento del Consejo.

(Firmado) Payton **Knopf**
Coordinador

Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur establecido
en virtud de la resolución 2206 (2015) del Consejo de Seguridad

(Firmado) Andrews **Atta-Asamoah**
Experto

(Firmado) Ann **Oosterlinck**
Experta

(Firmado) Lucas **van de Vondervoort**
Experto



Informe provisional del Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) del Consejo de Seguridad

Resumen

En las 10 semanas transcurridas desde el comienzo de sus trabajos, el Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur realizó numerosos viajes dentro de Sudán del Sur y también viajó a Etiopía, Kenya, el Sudán y Uganda. En el curso de esos viajes, el Grupo de Expertos consultó con las partes que libraban la guerra y también con los más afectados por el conflicto, incluidos los desplazados internos, los dirigentes tribales y comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, los agentes humanitarios y el personal de mantenimiento de la paz. En el presente informe se exponen las constataciones preliminares de esa investigación.

Desde la aprobación de la resolución 2206 (2015) por el Consejo de Seguridad, la situación en Sudán del Sur se ha deteriorado de manera precipitada y plantea una amenaza importante, no solo para la población del país, sino también para la paz y la seguridad de toda la región.

La situación tanto humanitaria como de derechos humanos y el entorno para las operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz continúan empeorando con celeridad. Desde marzo de 2015, otras 100.000 personas se han visto desplazadas dentro del país, con lo cual el número total de desplazados internos asciende a más de 1,6 millones de personas. El número de personas que enfrentan una grave inseguridad alimentaria virtualmente se ha duplicado desde el principio de 2015, y se estima ahora que asciende a 4,6 millones, incluidos 250.000 niños con desnutrición grave; estas cifras son las más elevadas registradas desde el comienzo de la guerra.

Desde el comienzo de la ofensiva en la zona del gran Alto Nilo en abril de 2015, la intensidad y la brutalidad de la violencia contra la población civil no tienen hasta ahora precedente, ni siquiera en lo que ya ha sido —sin ninguna duda— un conflicto excesivamente violento. Alrededor de 750.000 personas se han visto afectadas por la reciente campaña militar en el estado de Unidad solamente, y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios informa de que, como mínimo, 138.000 de esas personas que estaban recibiendo asistencia humanitaria antes del resurgimiento de la violencia están ahora privadas de dicha asistencia debido a la situación de inseguridad. El número real de damnificados probablemente sea muy superior.

La obstrucción de las operaciones de asistencia humanitaria y de mantenimiento de la paz también ha ido en aumento desde que se aprobó la resolución 2206 (2015). Tanto los trabajadores humanitarios como el personal de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur han sido una y otra vez atacados, agredidos, hostigados, detenidos, intimidados y amenazados. En mayo de 2015 los agentes humanitarios informaron del mismo número de incidentes relacionados con el acceso que se había registrado en los dos meses anteriores combinados. Se ha acusado a todas las partes en el conflicto de desviar la asistencia humanitaria, incluso mediante la detención de los convoyes humanitarios en puestos de control y la exigencia bajo coerción del pago de sumas de dinero para autorizar un desplazamiento en condiciones de seguridad o el uso de los caminos. Las incesantes violaciones del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas y las restricciones de

circulación han sido devastadoras para las operaciones de la Misión y su capacidad para ejecutar el mandato de proteger a la población civil en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Todas las partes en el conflicto han atacado a la población civil como parte de sus tácticas militares y, por lo tanto, han violado el derecho internacional humanitario aplicable, como se dice en la resolución 2206 (2015). Veintenas de civiles han sido muertos, mutilados, torturados, quemados vivos dentro de sus viviendas, desplazados, violados y secuestrados, y los niños han sido reclutados y utilizados en la acción bélica. El Grupo de Expertos está estudiando la cadena de mando en relación con esos crímenes graves.

El suministro de armas y municiones al Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés y al Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición, y también a las fuerzas afiliadas, ha servido para prolongar la guerra y acrecentar su escala. Es evidente, además, que la adquisición por el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés de una mayor capacidad aérea y fluvial forma parte de una estrategia encaminada a reducir la desventaja táctica que plantea la dificultad de desplegar tropas y equipo pesado durante la temporada de lluvias, lo que podría tener una incidencia sustancial en la dinámica sobre el terreno. El Grupo de Expertos continuará examinando esas transferencias, incluidas sus fuentes y las redes de traficantes que las sustentan, así como su incidencia sobre la guerra y su función en las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El Grupo de Expertos también comenzó investigaciones de los canales de financiación utilizados por el Gobierno y la oposición para librar la guerra y también de las personas y entidades que se benefician financieramente de la continuación del conflicto. El Grupo de Expertos expondrá sus constataciones en sus próximos informes de actualización al Consejo de Seguridad, habida cuenta de los criterios de designación para las sanciones establecidos en la resolución 2206 (2015).

En las próximas semanas, el Consejo de Seguridad ha de examinar la aplicación de la resolución 2206 (2015) en el contexto de dos posibles hipótesis. En primer lugar, si para el 17 de agosto las partes no firmaran el acuerdo de avenencia sobre la resolución del conflicto en Sudán del Sur, propuesto recientemente por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, será esencial que se determine la responsabilidad por ese fracaso y se adopten sin demora medidas en consonancia con dicha responsabilidad. En segundo lugar, si las partes suscribieran un acuerdo, el problema más importante no radicaría exclusivamente en la aplicación de dicho acuerdo y el fin de la violencia, sino también en la promoción de una reconciliación nacional y una solución política duradera e inclusiva para Sudán del Sur, en particular una garantía de que se han de rendir cuentas por los graves crímenes cometidos en el curso de la guerra. En la resolución 2206 (2015) se prevé la aplicación de sanciones en relación con cualquiera de esas hipótesis.

Índice

	<i>Página</i>
I. Antecedentes	6
A. Mandato y nombramiento	6
B. Metodología	7
C. Cooperación con partes interesadas y organizaciones	7
II. Contexto político y económico del conflicto	8
A. Sinopsis del conflicto	8
B. Contexto regional	9
C. Proceso político	9
D. Grupos armados	10
E. Contexto económico	11
III. Crisis humanitaria	13
A. Situación humanitaria general	13
B. Obstrucción de las operaciones de asistencia humanitaria y de mantenimiento de la paz	13
C. Violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos	15
IV. Los recursos naturales y la financiación del conflicto	18
A. Petróleo	18
B. Ganadería	19
C. Saqueos	20
D. Fauna y flora silvestres	21
V. Transferencias de armas	21
A. Transferencias de armas al Gobierno	21
B. Transferencias de armas al M/ELPS en la Oposición	25
C. Efectos del reabastecimiento de armas y municiones	26
VI. Recomendaciones	27
 Anexos	
I. Table of correspondence sent and received by the Panel from 18 May to 31 July 2015	30
II. Humanitarian crisis in South Sudan	31
III. Hospital in Kodok, Upper Nile State	33
IV. SPLM/A in Opposition attack on Bentiu, 29 October 2014	35
V. April-July 2015 Unity State offensive by SPLA and associated armed groups	38

VI. Current state of armed groups in South Sudan	44
VII. Percentage budgetary allocation by sector	48
VIII. Disruptions in livestock migrations.	49
IX. Section of captured cattle brought to Bentiu in mid-June	50
X. SPLM/A in Opposition fighters in Bentiu loot a slain SPLA soldier on 5 May 2014.	51
XI. Analysis of photographic evidence of Mil Mi24 helicopter flying the South Sudanese flag	52
XII. Documentation concerning shipment of arms, ammunition, and related materiel from Norinco to the Ministry of Defence and Veterans' Affairs, June 2014	53
XIII. Summary of emergency SPLA budget, January-June 2014.	57

I. Antecedentes

A. Mandato y nombramiento

1. En virtud de la resolución 2206 (2015), el Consejo de Seguridad estableció, por un lado, un régimen de sanciones que se aplicarían a las personas y entidades designadas por contribuir al conflicto en Sudán del Sur y, por el otro, un Comité de Sanciones (el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2206 (2015) relativa a Sudán del Sur). El Comité designó a seis personas el 1 de julio.

2. Al establecer el régimen de sanciones, el Consejo de Seguridad decidió que las sanciones, esto es, la prohibición de viajar y la congelación de activos, se aplicarían a las personas físicas o entidades designadas por el Comité que fueran responsables o cómplices de actos o políticas que constituyeran una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur, o que hubieran participado directamente en dichos actos o políticas.

3. El Consejo de Seguridad estableció también un Grupo de Expertos (el Grupo de Expertos sobre Sudán del Sur) para suministrar información y realizar análisis en relación con la aplicación de la resolución, incluida la información relacionada con posibles designaciones y con el suministro, la venta o transferencia de armas y equipo bélico conexo y la asistencia militar conexa o de otra índole, en particular mediante las redes de traficantes ilícitos, a personas físicas y entidades que obraran en detrimento de los procesos políticos o violaran el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.

4. El 27 de abril el Secretario General, en consulta con el Comité, nombró a los cinco miembros del Grupo de Expertos (véase S/2015/287), a saber, un experto en recursos naturales y finanzas (Sr. Andrews Atta-Asamoah, de Ghana), un experto en cuestiones regionales (Sr. Payton Knopf, de los Estados Unidos de América), un experto en asuntos humanitarios (Sra. Anna Oosterlinck, de Bélgica), un experto en armas (Sr. Lucas van de Vondervoort, de los Países Bajos) y un experto en grupos armados (Sr. Vladimir Zhagora, de Belarús)¹.

5. El Grupo de Expertos comenzó sus trabajos el 18 de mayo con una semana de reuniones preparatorias en Nueva York. Desde entonces ha mantenido una presencia casi permanente en la región, incluidas visitas a seis de los 10 estados de Sudán del Sur y a países vecinos, entre ellos Etiopía, Kenya, el Sudán y Uganda.

6. En las 10 semanas transcurridas desde el inicio de sus trabajos, el Grupo de Expertos ha celebrado conversaciones con una amplísima gama de partes interesadas que están involucradas en el conflicto o se ven afectadas por él, incluso los funcionarios de alto nivel del Gobierno de Sudán del Sur, entre ellos los del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (ELPS); los dirigentes del Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (M/ELPS en la Oposición); el G-10/“antiguos detenidos”²; los desplazados, incluidos los que

¹ El mandato del Sr. Zhagora concluyó el 16 de julio de 2015. El Grupo de Expertos le está sumamente agradecido por su contribución a la fase inicial de sus trabajos, incluso en relación con el presente informe, y por su asesoramiento y conocimientos especializados en el futuro.

² El G-10/“antiguos detenidos” está compuesto de antiguos funcionarios públicos detenidos por el Gobierno en relación con acontecimientos sucedidos en Yuba el 15 de diciembre de 2014. Estas

se encontraban en emplazamientos de protección de civiles de las Naciones Unidas en Sudán del Sur; los representantes de la sociedad civil y las comunidades; los dirigentes tribales; las organizaciones regionales, incluidas la Comisión de la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD); el personal directivo de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS); la Oficina del Enviado Especial para el Sudán y Sudán del Sur; los organismos humanitarios de las Naciones Unidas; y las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales y otras organizaciones no gubernamentales.

7. Las constataciones expuestas en el presente informe son preliminares y no suministran detalles concluyentes respecto de todas las investigaciones iniciadas por el Grupo de Expertos en cumplimiento de su mandato. El Grupo de Expertos presentará una información más completa sobre el resultado de las investigaciones en sus informes mensuales de actualización al Consejo de Seguridad y en su informe final.

B. Metodología

8. Si bien fue establecido por el Consejo de Seguridad, el Grupo de Expertos es un órgano independiente que realiza su cometido de manera objetiva y fundada en los hechos y protege sus trabajos de toda acción que pueda obrar en detrimento de su imparcialidad o crear la percepción de un sesgo. El Grupo de Expertos en pleno aprobó el texto, las conclusiones y las recomendaciones contenidas en el presente informe en régimen de consenso antes de transmitirlo a la Presidencia del Comité.

9. A la luz del contexto politizado del conflicto en Sudán del Sur, el Grupo de Expertos está plenamente resuelto a velar por la observancia de las normas recomendadas por el Grupo de Trabajo Oficioso del Consejo de Seguridad sobre Cuestiones Generales Relativas a las Sanciones en su informe de diciembre de 2006 (S/2006/997). En dichas normas se indica que se deben utilizar documentos verificados y auténticos, pruebas concretas y observaciones directas in situ por los propios expertos, incluidas pruebas fotográficas toda vez que sea posible. El Grupo de Expertos corrobora la información utilizando múltiples fuentes independientes, a fin de conformarse debidamente a los criterios probatorios más estrictos y atribuye mayor valor a las declaraciones de los agentes principales y a los testigos directos de los actos.

10. El Grupo de Expertos lleva a cabo su labor con la mayor transparencia posible, manteniendo al propio tiempo la confidencialidad sus fuentes, cuando así se le solicita. Está resuelto asimismo a obrar con estricta equidad y brindará a las partes pertinentes la oportunidad, cuando corresponda y sea posible, de examinar, dentro de un plazo determinado, las informaciones contenidas en su informe en que se cite a dichas partes y de responder a dichas informaciones.

C. Cooperación con partes interesadas y organizaciones

11. Si bien actúa de manera independiente de los organismos e instituciones de las Naciones Unidas, el Grupo de Expertos quisiera, no obstante, expresar su sincero

personas son Deng Alor, Pagan Amun, Oyay Deng, Cirino Hiteng, John Luk Jok, Kosti Manibe, Gier Chuang Aluang, Madut Biar, Chol Tong Mayay y Majak D'Agoot.

agradecimiento a los funcionarios directivos y el personal de la UNMISS, la Oficina del Enviado Especial para el Sudán y Sudán del Sur y los demás funcionarios de las Naciones Unidas con destino en Addis Abeba, Kampala, Jartún y Nairobi, por su invaluable apoyo administrativo en el curso de la primera fase de la misión del Grupo de Expertos.

12. Al 31 de julio de 2015, el Grupo de Expertos había cursado 16 notas de correspondencia oficial a nueve Estados, organizaciones y otras entidades, y había recibido 10 respuestas en las que se suministraba la información solicitada (véase el anexo I).

II. Contexto político y económico del conflicto

13. La aprobación por el Consejo de Seguridad de la resolución 2206 (2015) en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas se sustentó en la determinación de que la crisis en Sudán del Sur planteaba una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Desde la aprobación de dicha resolución, la situación ha empeorado de manera precipitada. Al tiempo de presentarse este informe al Comité (el 31 de julio de 2015), la guerra había afectado a los 10 estados de Sudán del Sur y constituía una amenaza importante, no solo para sus ciudadanos, sino también para la paz y la seguridad de toda la región.

A. Sinopsis del conflicto

14. La lucha de la élite por el poder que precipitó el actual conflicto ha evolucionado hasta transformarse en una guerra multifacética que, cada vez más, abarca, entre otras cosas, la violencia interétnica e intraétnica de gran escala. La lucha entre el ELPS y el M/ELPS en la Oposición, así como sus milicias afiliadas, afecta a los estados de Alto Nilo, Unidad y Jonglei. El conflicto también se ha extendido ahora a los estados de Bahr El Ghazal Septentrional y Bahr El Ghazal Occidental, aunque con menor intensidad y en zonas geográficas relativamente más pequeñas. También se han reavivado las causas tradicionales de violencia intracomunitaria que tienen su origen en la competencia por el agua, los pastizales y el ganado, que afectan a los estados de Warab y Lagos, en particular. Estos últimos han experimentado, además, una intensificación del conflicto en el seno de las subtribus. Además, han reaparecido catalizadores de la violencia de larga data en la región de gran Ecuatoria (los estados de Ecuatoria Oriental, Ecuatoria Occidental y Ecuatoria Central, incluso en la capital nacional, Yuba, y sus alrededores) de resultas de que los pastores nómades apoyados por el ELPS reclaman el acceso a pastizales y asentamientos en zonas tradicionalmente pobladas y utilizadas por poblaciones indígenas sedentarias.

15. En el contexto de la crisis actual, la Asamblea Legislativa Nacional, que no incluye ya a miembros afiliados con el M/ELPS en la Oposición, aprobó el 24 de marzo una enmienda constitucional en virtud de la cual se prorrogaron por tres años los mandatos del Presidente, la Asamblea Legislativa Nacional y las asambleas legislativas de los estados, hasta el 9 de julio de 2018. Análogamente, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2017 el mandato de la Comisión de Revisión Constitucional Nacional. La oposición ha repudiado esas decisiones por considerarlas inconstitucionales.

B. Contexto regional

16. Los países vecinos de Sudán del Sur han respondido a la guerra con medios tanto militares como políticos.

17. El 20 de diciembre de 2013, el ejército de Uganda desplegó como mínimo una compañía en Yuba para controlar el aeropuerto y, según indicó Uganda, evacuar a ciudadanos ugandeses. Su intervención se amplió posteriormente, comenzando con el despacho de refuerzos a fin de repeler un avance de la oposición sobre Yuba a principios de enero de 2014, para luego incluir una función primaria en la ofensiva destinada a desalojar a la oposición de Bor, estado de Jonglei, a mediados de enero de 2014. Según el ejército de Uganda, una brigada seguía desplegada en Sudán del Sur en julio de 2015. De acuerdo con las informaciones directas recibidas de una amplia gama de interlocutores en diversas partes del país, el despliegue del ejército de Uganda y, en general, el papel de Uganda en Sudán del Sur desde diciembre de 2013 ha pasado a ser un espinoso problema político entre la población nuer en particular.

18. La intervención política regional ha sido más difusa. En gran medida, esta dinámica es sintomática de las tensiones bilaterales entre varios Estados inmediatamente vecinos de Sudán del Sur, como ocurre también en otros Estados cercanos, que comparten una preocupación común ante la amenaza que el colapso de Sudán del Sur plantea para sus intereses de seguridad nacional, pero no es indicativa en igual medida de un programa o enfoque común para enfrentar esa amenaza. Esto último se debe tanto a rivalidades de larga data entre los Estados regionales, tal como ocurre entre el Sudán y Uganda, como a divergencias de pareceres entre Estados vecinos respecto de la configuración del equipo gobernante en Sudán del Sur que mejor se compagine con sus propios intereses políticos y económicos individuales.

C. Proceso político

19. A fines de 2013 la IGAD inició un proceso de mediación sustentado fundamentalmente en arreglos de compartición del poder entre el Presidente, Sr. Salva Kiir, el ex Vicepresidente y jefe del M/ELPS en la Oposición, Sr. Riek Machar, y sus respectivos partidarios³, arreglos que muchas veces se han visto trabados por desacuerdos al respecto. Esos arreglos han caracterizado la estructura gobernante de Sudán del Sur desde la independencia hasta diciembre de 2013 y, en mayor o menor medida, la estructura del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (MLPS) por lo menos desde 2002.

20. Las tentativas por revitalizar el proceso político tras las negociaciones que se estancaron en marzo llevaron a introducir ajustes en la arquitectura de mediación para ampliar la participación de los Estados regionales y de la comunidad internacional en general. Esas tentativas incluyeron el nombramiento del ex-Presidente del Malí, Sr. Alpha Oumar Konare, en calidad de Alto Representante de la Unión Africana para Sudán del Sur; el establecimiento de un Comité Especial de

³ El equipo de mediación de la IGAD está presidido por tres enviados especiales: Seyoum Mesfin Gebredingel, de Etiopía, Muhammad Ahmad Mustafa Al -Dhabi, del Sudán, y Lazaro Sumbeiu, de Kenya.

Alto Nivel de la Unión Africana para Sudán del Sur, compuesto de Jefes de Estado que representaban a diversas subregiones del continente; y la puesta en marcha de un proceso de formato “IGAD plus”, compuesto de Estados miembros de la IGAD, los miembros del Comité Especial de Alto Nivel de la Unión Africana para Sudán del Sur, la Comisión de la Unión Africana, la Troika⁴, las Naciones Unidas, la Unión Europea y China.

21. En forma relativamente paralela, la República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Kenya y Etiopía iniciaron una gestión para lograr una convergencia entre las gestiones de mediación de la IGAD y el “proceso de Arusha”. Puesto en marcha en 2014 por el Chama Cha Mapinduzi, el partido político gobernante de Tanzania, y el Congreso Nacional Africano, el partido político gobernante de Sudáfrica, sin coordinación con la IGAD, el proceso de Arusha había plasmado en la firma, en enero de 2015, de un acuerdo sobre la reunificación del MLPS por el Presidente de Sudán del Sur, Sr. Riek Machar, y el Sr. Deng Alor (en nombre del G 10/“antiguos detenidos”) y, en última instancia, en dos visitas de representantes del G 10 a Yuba y la restauración del Sr. Pagan Amum en calidad de Secretario General del MLPS.

22. El 24 de julio, el equipo de mediación de la IGAD —con el respaldo del grupo “IGAD plus”— presentó a las partes un proyecto de acuerdo de avenencia sobre la resolución del conflicto en Sudán del Sur. De conformidad con el calendario establecido por el equipo de mediación, las partes deben reunirse nuevamente en Addis Abeba el 5 de agosto para celebrar conversaciones encaminadas a la firma de un acuerdo para el 17 de agosto.

23. En las próximas semanas, el Consejo de Seguridad ha de examinar la aplicación de la resolución 2206 (2015) en el contexto de dos posibles hipótesis. En primer lugar, si para el 17 de agosto las partes no firman un acuerdo de avenencia, será preciso que se determine la responsabilidad por ese fracaso y se adopten sin demora medidas en consonancia con dicha responsabilidad. En segundo lugar, si las partes suscriben un acuerdo, el problema más importante no radicará exclusivamente en la aplicación de dicho acuerdo y el fin de la violencia, sino en la promoción de una reconciliación nacional y una solución política duradera e inclusiva para Sudán del Sur, en particular una garantía de que se han de rendir cuentas por los graves crímenes cometidos en el curso de la guerra. En la resolución 2206 (2015) se prevé la aplicación de sanciones en relación con cualquiera de esas hipótesis.

D. Grupos armados

24. Los grupos armados activos en Sudán del Sur, incluidas las fuerzas organizadas del Gobierno, son el producto de la historia del país, en la cual las milicias armadas han luchado contra las autoridades centrales y también entre sí por tierras y recursos y para contrarrestar la marginación política. Tras el estallido de las hostilidades en 2013, el Gobierno sufrió un fuerte revés de resultados de la desertión en masa de unidades principalmente nuer del ELPS, al mando de antiguos jefes de las milicias, que habían sido absorbidas, aunque no totalmente integradas, en el ELPS. El Gobierno ya confiaba poco en algunas de sus propias unidades y, desde

⁴ La Troika se compone de los Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Noruega, que figuraban entre los garantes del Acuerdo General de Paz de 2005.

entonces, ha tratado de contrarrestar la fragmentación del ELPS mediante el fortalecimiento de la función de la Guardia Presidencial (la División Tigre del ELPS)⁵ y el Servicio de Seguridad Nacional.

25. Ambas partes han dependido fuertemente de las milicias juveniles que, tradicionalmente, han librado batalla con otros grupos étnicos y clanes por la posesión de ganado y tierras. Entre ellas se cuentan el “Ejército Blanco” nuer, que lucha del lado del M/ELPS en la Oposición, y los jóvenes bul nuer, que luchan del lado del Gobierno en el estado de Unidad, lo que ha dado lugar a una importante escisión en el seno de la comunidad nuer que será difícil subsanar. Ninguna de las partes ejerce pleno control sobre las acciones de las milicias y grupos juveniles, que luchan parcialmente por sus propios objetivos, que no están directamente vinculados con la guerra. Ello se puso en evidencia cuando el General de División Johnson Olony abandonó las filas del Gobierno para pasarse a la oposición en el estado de Alto Nilo, lo que llevó a una fragmentación de ese estado en tres zonas divididas aproximadamente con arreglo a las etnias. El Gobierno también ha dependido de la asistencia del Movimiento Sudánés por la Justicia y la Igualdad.

26. Fuera de la zona del gran Alto Nilo también actúan varios grupos armados locales, incluso en los estados de Bahr El Ghazal Septentrional y Bahr El Ghazal Occidental y los estados de Ecuatoria. En muchos casos, su vinculación con la guerra y el programa político del M/ELPS en la Oposición es limitada. Además, el conflicto intraétnico e interétnico en los estados de Warab y Lagos ha producido un número creciente de víctimas y el Gobierno ha demostrado una capacidad limitada para poner fin a la violencia (para una catalogación más detallada del estado actual de los grupos armados en Sudán del Sur, véase el anexo VI).

E. Contexto económico

27. Sudán del Sur suspendió la producción de petróleo en enero de 2012 debido a discrepancias con el Sudán sobre los aranceles de tránsito. La producción se reanudó en abril de 2013. Durante el periodo de la suspensión, el país se embarcó en un programa de austeridad encaminado a recortar el gasto público para compensar la pérdida de rentas. Los déficits presupuestarios se enjugaron mediante ventas a plazo a las compañías petroleras, préstamos y empréstitos del banco central. El estallido de la guerra pocos meses después de la recuperación de una fuente fiable de rentas del petróleo, por lo tanto, ha llevado a continuar las medidas de austeridad en medio del conflicto.

28. Desde diciembre de 2013, las rentas del petróleo han disminuido significativamente debido a una contracción de la producción y a la caída de los precios mundiales del petróleo, además de la necesidad de sufragar los aranceles petroleros fijos y las disposiciones financieras de transición con el Sudán. De acuerdo con las propias estadísticas del Gobierno, el total de las rentas fiscales había sido inferior a las proyecciones en el presupuesto para 2014 por un valor de hasta 2.200 millones de dólares, lo que dio lugar a una insuficiencia global de 1.200

⁵ La Guardia Presidencial desempeñó un papel crucial en la lucha que estalló en Yuba en diciembre de 2013 y lo propio hizo la milicia denominada “Mathiang Anyoor”, que luego se integró en el Servicio de Seguridad Nacional.

millones de dólares en marzo de 2015⁶. El Ministerio de Finanzas y Planificación Económica estima que ese déficit se elevará a alrededor de 3.000 millones de dólares en el ejercicio económico de 2015 (1 de julio a 30 de junio).

29. El Gobierno continúa obteniendo fondos mediante empréstitos del banco central, ventas de petróleo a plazos y préstamos externos. El aumento de la oferta monetaria originado en la toma de empréstitos del banco central por un valor de alrededor de 2.200 millones de dólares ha alimentado la inflación⁷. La libra sursudanesa perdió alrededor de 50% de su valor en el mercado negro entre enero y julio de 2015, esto es, descendió de una paridad de alrededor de 5 libras sursudanesas por dólar de los Estados Unidos en enero de 2015 a alrededor de 11 libras sursudanesas por dólar de los Estados Unidos a mediados de julio⁸. El tipo de cambio oficial se mantuvo en un valor fijo de 2,95 libras sursudanesas por dólar de los Estados Unidos.

30. La existencia de un tipo de cambio elevado en el mercado negro, que corre paralelo a un tipo de cambio oficial inferior, entraña un costo elevado tanto para el Gobierno como para las operaciones de los organismos humanitarios internacionales. El Grupo de Expertos estima que por cada dólar de los Estados Unidos que gasta un organismo humanitario internacional al tipo de cambio oficial hay una pérdida del 73,2% (8,05 libras sursudanesas) del valor que tendría si el Gobierno eliminara la diferencia entre el tipo de cambio del mercado negro y el tipo de cambio oficial⁹.

31. El tipo de cambio paralelo, con todo, es solo uno de los muchos medios por conducto de los cuales quienes tienen acceso a moneda extranjera se benefician del conflicto gracias a la corrupción. La guerra ha puesto las facultades y el acceso a los recursos nacionales en manos de un número limitado de personas en el centro de la actual estructura gobernante.

32. La deuda pública continúa en rápido ascenso. Al tiempo de la independencia, Sudán del Sur no tenía deuda pública. En junio de 2015, sin embargo, el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica reconoció que la deuda había llegado a 4.200 millones de dólares, esto es, que había sufrido un aumento de 700 millones de dólares frente a los niveles registrados en enero de 2015¹⁰. La deuda actual del país representa alrededor del 35% de su producto interno bruto de 2013¹¹.

⁶ En el presupuesto aprobado para 2014/2015 se había proyectado que el total de rentas ascendería a 11.700 millones de libras sursudanesas, pero en marzo de 2015, solo se habían recaudado 5.300 millones de libras sursudanesas (sobre la base de las cifras consignadas en el programa estratégico trienal que el Ministro de Finanzas y Planificación Económica comunicó al Grupo de Expertos durante la visita de este en junio).

⁷ Esa era la suma total que se había tomado en préstamo para el fin de marzo de 2015. Esta constatación se corrobora con la información trimestral actualizada del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica sobre la gestión económica de abril de 2015.

⁸ Véase <https://radiotamazuj.org/sites/default/files/u2442/XRATE%20UPDATE%2020150727.jpg>.

⁹ Esta estimación se basa en los tipos de cambio oficial y del mercado negro de mediados de julio de 2015.

¹⁰ Se proyecta que las cifras reales serán más elevadas porque el Ministerio carece de capacidad para efectuar el seguimiento en tiempo real de todos los gastos que realizan los organismos en nombre del Gobierno.

¹¹ La verdadera importancia de los crecientes niveles de endeudamiento no radica en las cifras absolutas registradas, sino en la elevada tasa de aumento observada desde diciembre de 2013.

III. Crisis humanitaria

A. Situación humanitaria general

33. Desde que el Grupo de Expertos comenzó su labor, la situación humanitaria en Sudán del Sur ha continuado su marcado deterioro. Los asociados humanitarios, en general, han aceptado ahora que las necesidades de la nación más nueva del mundo han alcanzado una escala sin precedente en la historia del país e indudablemente continuarán en ascenso. La falta de acceso de los agentes humanitarios a zonas importantes del país de resultas de la guerra, la profundización de las escisiones étnicas, los grandes desplazamientos de población, la aguda brutalidad de la violencia, las interrupciones significativas de la producción agropecuaria, la elevada malnutrición, el empeoramiento de la situación económica y una marcada contracción de la financiación de donantes, junto con un fuerte aumento de las necesidades, han hecho que Sudán del Sur padezca una de las emergencias humanitarias más graves del mundo. El 11 de febrero de 2014, la Coordinadora del Socorro de Emergencia designó a Sudán del Sur situación de emergencia de nivel 3 en el sistema¹², una de solo cuatro situaciones de emergencia de ese nivel en todo el mundo y la única de su índole en África al tiempo de redactarse el presente informe (para una sinopsis más completa de la crisis humanitaria en Sudán del Sur, véase el anexo II).

B. Obstrucción de las operaciones de asistencia humanitaria y de mantenimiento de la paz

34. El entorno de las operaciones humanitarias y de mantenimiento de la paz sigue desmejorando debido a la escala de la violencia en el país en general, los actos de obstrucción y los ataques deliberados y oportunistas en perjuicio del personal y los bienes humanitarios y de mantenimiento de la paz en particular.

1. Obstrucción de la asistencia humanitaria

35. Los actos de obstrucción de la asistencia humanitaria han ido en aumento desde que se aprobó la resolución 2206 (2015). En mayo solamente, los agentes humanitarios notificaron el mismo número de incidentes relacionados con el acceso que en los dos meses precedentes combinados (134 incidentes, frente a 72 en abril y 64 en marzo). En cambio, los agentes humanitarios habían informado de 78 incidentes en mayo de 2014. El mes de abril de 2015 fue también la primera vez desde el comienzo del conflicto en que los incidentes notificados estuvieron las más de las veces relacionados con hostilidades activas (principalmente en los estados de Alto Nilo y Unidad) y con la inseguridad (en el estado de Lagos)¹³.

¹² Las emergencias de nivel 3 son crisis humanitarias muy graves y de gran escala.

¹³ Según fuente confidencial de la comunidad humanitaria.

36. El acceso humanitario al Río Nilo está suspendido desde el julio de 2013¹⁴, después de un ataque armado contra una barcaza que enarbolaba pabellón de las Naciones Unidas y transportaba 500.000 litros de combustible a Malakal.

37. De acuerdo con la información reunida por el Grupo de Expertos de fuentes primarias y secundarias, a principios de abril de 2015 había 73 asociados humanitarios presentes en el estado de Unidad. Esa presencia había declinado de manera repentina y pronunciada a 42 para el mes de junio, debido al recrudecimiento reciente de la violencia, que obligó a los asociados a evacuar a su personal de la parte sur del estado de Unidad en particular.

38. El 5 de julio, un hospital en Kodok, en el estado de Alto Nilo, quedó atrapado en una situación de fuego cruzado durante un intenso combate entre fuerzas del Gobierno y del M/ELPS en la Oposición (véase el anexo III). Este es solo un ejemplo de una situación que viene afectando al personal y los establecimientos médicos en Sudán del Sur durante esta guerra.

39. Se ha denunciado que todas las partes en el conflicto han desviado la asistencia humanitaria, incluso mediante la detención de convoyes humanitarios en puestos de control y la exigencia bajo coerción del pago de sumas de dinero para autorizar un desplazamiento en condiciones de seguridad o el uso de los caminos. Esas prácticas ocurren periódicamente, no obstante la legislación nacional que las prohíbe.

40. Un indicador alarmante de la amenaza que gravita sobre las operaciones humanitarias es el número cada vez mayor de convoyes humanitarios que solicitan escolta armada, que se elevó repentinamente de 3 en mayo a 11 en junio. En julio, el número de solicitudes culminó en una situación en la cual no había efectivos militares suficientes para las escoltas, pues, a causa de una inseguridad cada vez mayor, la UNMISS se había visto obligada a desplegar más efectivos para proteger sus bases y los emplazamientos de protección de civiles. En consecuencia, se desplegaron patrullas de largo alcance de la UNMISS en la principal ruta de abastecimiento en el corredor entre Yuba y Bentiu, pasando por Rumbek, Wau y Kuacjok. En consonancia con el principio humanitario de independencia¹⁵, los agentes humanitarios no desean estar asociados con los objetivos y las actividades de ninguna de las fuerzas armadas presentes en el país, ni siquiera las de la UNMISS. La solicitud de escolta armada, por lo tanto, es una opción de última instancia, indicativa del grave deterioro del entorno de las operaciones.

¹⁴ Véanse las observaciones ante la prensa de la Coordinadora del Socorro de Emergencia (25 de julio de 2015) en <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/USG%20O%27brien%20remarks%20to%20the%20press%20in%20Yuba%2C%20South%20Sudan%2C%2025%20July%202015-2.pdf>.

¹⁵ El Grupo de Expertos usa la definición convenida de independencia: “La acción humanitaria debe ser autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo que cualquier agente humanitario pueda tener respecto a las zonas donde se estén ejecutando medidas humanitarias.”

Véase https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_Spanish.pdf.

41. Por último, los complejos y establecimientos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales internacionales han sido saqueados, algunos de ellos muchas veces. En Yuba, 12 complejos fueron objeto de robos en julio solamente, si bien el número presumiblemente sea mucho mayor¹⁶.

2. Ataques contra trabajadores humanitarios

42. Desde el inicio de la crisis, por lo menos 30 trabajadores humanitarios han perdido la vida, ya sea porque fueron víctimas de asesinatos o porque quedaron atrapados en situaciones de fuego cruzado¹⁷. El Grupo de Expertos constató que siete de esos trabajadores humanitarios habían sido muertos en el estado de Unidad en el reciente recrudecimiento de la violencia, tres de ellos solo en el mes de julio. Además, el Grupo de Expertos recibió muchas denuncias de que trabajadores humanitarios habían sido raptados, hostigados, agredidos, detenidos o privados de libertad, reclutados por la fuerza o amenazados¹⁸. El Coordinador Humanitario fue expulsado el 1 de junio por el Gobierno. El Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento, sin éxito, al Gobierno para que anulara esa decisión inmediatamente¹⁹.

3. Obstrucción de las operaciones de la Misión

43. El personal de la UNMISS está siendo periódicamente atacado, hostigado, detenido, intimidado y amenazado. Desde marzo de 2014, la Misión ha sido víctima de más de 400 violaciones del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, más del 90% de las cuales fueron perpetradas por el Gobierno. En comparación, con respecto exclusivamente a las restricciones de circulación, la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur informó de 24 incidentes de restricción de la circulación en el período comprendido entre el 26 de febrero y el 15 de mayo, frente, como mínimo, a 37 incidentes experimentados por la UNMISS en aproximadamente igual período. En mayo y junio, la UNMISS experimentó 43 incidentes. El efecto acumulativo de esa persistente obstrucción ha sido devastador para las operaciones de la Misión y su capacidad para ejecutar el mandato de proteger a la población civil en virtud del Capítulo VII de la Carta.

C. Violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos

44. Desde el comienzo del conflicto, varios agentes internacionales, incluidos la UNMISS, el Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la IGAD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han dado a conocer denuncias en las que se describen con detalle actos que violan el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario o que representan abusos de derechos humanos, todos los cuales

¹⁶ Entrevistas con el Grupo de Expertos en Yuba.

¹⁷ Entrevista con funcionarios de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios; observaciones ante la prensa de la Coordinadora del Socorro de Emergencia (25 de julio de 2015).

¹⁸ Entrevistas con el Grupo de Expertos en Yuba.

¹⁹ Declaración atribuible a la Oficina del Portavoz del Secretario General sobre Sudán del Sur (1 de junio de 2015). Véase <http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8693>.

constituyen causas para la aplicación de sanciones en virtud de la resolución 2206 (2015). Las atrocidades que se han denunciado han sido ampliamente condenadas por los agentes políticos internacionales, incluidos el Consejo de Seguridad, el Secretario General, la Unión Africana, la IGAD y la Unión Europea.

45. No obstante ese consenso internacional y las numerosas promesas de las partes de investigar las denuncias, el Grupo de Expertos ha encontrado poca o ninguna prueba de actuaciones judiciales que las partes en el conflicto hayan incoado en aplicación de la normativa internacional²⁰. De conformidad con el derecho internacional, la responsabilidad de investigar y enjuiciar de manera equitativa y eficaz esos delitos recae en el Gobierno. La impunidad general que caracteriza al actual conflicto solo se ha visto agravada por los recientes acontecimientos en la región del gran Alto Nilo y está ahondando las escisiones políticas y étnicas en el seno de la sociedad sursudanesa.

46. En marzo de 2014, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana estableció una comisión de investigación sobre Sudán del Sur, presidida por el ex-Presidente de Nigeria, Sr. Olusegun Obasanjo, para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas desde diciembre de 2013. El Sr. Obasanjo presentó un informe al Consejo al fin de 2014, momento en el cual este se abstuvo de examinarlo. El informe se distribuyó a los miembros del Consejo en la semana del 20 de julio de 2015. El 24 de julio, el Consejo se reunió a nivel ministerial, conforme lo había decidido anteriormente en la cumbre de la Unión Africana celebrada en Pretoria en junio y declinó dar a publicidad el informe. En cambio, estableció un subcomité especial, integrado por Argelia, el Chad, Etiopía, Nigeria, Sudáfrica, la República Unida de Tanzania y Uganda, para examinar el informe y formular recomendaciones sobre el camino a seguir. Esas recomendaciones serán examinadas por el Consejo a nivel de Jefes de Estado para el fin de agosto de 2015²¹.

47. El Grupo de Expertos solicitó un ejemplar confidencial del informe el 26 de junio por conducto del entonces Presidente del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, con copia a la Comisión de la Unión Africana. Al 31 de julio, el Grupo de Expertos no había recibido respuesta a dicha solicitud.

1. Ataques contra civiles

48. En el curso de sus investigaciones, el Grupo de Expertos constató que todas las partes en el conflicto venían realizando ataques contra civiles como parte de sus tácticas militares, en contravención, por lo tanto, del derecho internacional humanitario como se establece en la resolución 2206 (2015). El Grupo de Expertos está investigando la cadena de mando en relación con esos incidentes tan generalizados.

²⁰ Véanse, por ejemplo, American Bar Association, “Assessment of justice, accountability, and reconciliation measures” (Washington D.C., junio de 2014), en www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/sudan/aba_rolisudan_assessment_final_report_0614.authcheckdam.pdf; y “Riek Machar admits SPLM-IO never investigated Bentiu massacres”, Radio Tamazuj (8 de julio de 2015), en <https://radiotamazuj.org/en/article/riek-machar-admits-splm-io-never-investigated-bentiu-massacres>.

²¹ Véase <http://www.peaceau.org/en/article/communicate-of-the-526th-psc-meeting-at-the-level-of-ministers>.

49. El 29 de octubre de 2014, el M/ELPS en la Oposición atacó Bentiu, en el estado de Unidad, y cometió graves abusos de los derechos humanos (véase el anexo IV). Fueron muertos por lo menos 11 civiles y —de acuerdo con un informe especial de la UNMISS— los presuntos perpetradores calificaron de “Dinka” a las víctimas nuer para denotar lo que percibían era su apoyo al Gobierno²². Además, las mujeres fueron secuestradas y violadas. Los civiles que se refugiaron en una iglesia fueron golpeados y secuestrados a pesar de que los lugares de culto están amparados por el derecho internacional humanitario.

50. Durante el reciente recrudecimiento de la violencia en el estado de Unidad, que comenzó en abril, el ELPS y sus milicias afiliadas sometieron a la población civil a asesinatos, violaciones, secuestros y saqueos y provocaron incendios y desplazamientos forzosos, en el contexto de una ofensiva coordinada que implica una alteración de la dinámica del conflicto desde el punto de vista de la brutalidad táctica²³. Durante dos visitas sobre el terreno, el 15 y 16 de junio y el 8 y el 9 de julio, el Grupo de Expertos investigó esas atrocidades (véase el anexo V).

51. El Grupo de Expertos ha constatado que las fuerzas armadas tenían intención de hacer inviable la vida comunal e impedir la restauración de la normalidad después de los actos de violencia. Sobre la base de testimonios directos, el Grupo de Expertos llegó a la conclusión de que esa ofensiva tenía por objeto privar al M/ELPS en la Oposición de una base de apoyo a toda costa, incluso mediante la expulsión de la población de gran parte del estado de Unidad. Vistas todas las pruebas que tuvo ante sí, el Grupo de Expertos llegó a la conclusión de que, desde el mes de abril, la intensidad y brutalidad de la violencia contra la población civil no tienen precedente hasta ahora, en lo que ya ha sido —sin duda alguna— un conflicto excesivamente violento.

2. Violencia sexual y reclutamiento de niños

52. Las investigaciones preliminares del Grupo de Expertos²⁴, incluso durante sus visitas sobre el terreno, han indicado que todas las partes en el conflicto están utilizando deliberadamente la violación como parte de sus tácticas bélicas y que pueden hacerlo con total impunidad. Múltiples agentes han denunciado estas pautas de violencia sexual²⁵.

53. Las investigaciones preliminares del Grupo de Expertos sobre la base de fuentes primarias y secundarias han demostrado que todas las partes en el conflicto

²² UNMISS, informe especial sobre el ataque contra Bentiu; véase <http://unmiss.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5805>.

²³ UNMISS, informe urgente sobre derechos humanos en relación con la intensificación de la lucha en la zona del gran Alto Nilo; véase <http://unmiss.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5805>.

²⁴ Durante una visita sobre el terreno a Bentiu, el Grupo de Expertos pudo pasar algunas horas con desplazados internos en el emplazamiento de protección de civiles en Bentiu y tomó nota como mínimo de 12 incidentes de violación y violencia sexual en un plazo brevísimo.

²⁵ Véanse el informe urgente de la UNMISS sobre los derechos humanos antes mencionado e informes de derechos humanos anteriores de la UNMISS sobre los derechos humanos; el resumen de los informes más recientes del Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la IGAD sobre las violaciones del Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades correspondiente al período comprendido entre el 27 de abril y el 31 de mayo de 2015 en <http://southsudan.igad.int/index.php/2014-08-07-10-16-26>; y la nota informativa del UNICEF sobre protección de la infancia en <http://www.childrenofsouthsudan.info>.

se han servido del empleo de niños, tanto como combatientes como para realizar funciones de apoyo. Según información suministrada por el UNICEF y la UNMISS al Grupo de Expertos, más de 13.000 niños han sido reclutados en el curso de la guerra, muchos de ellos por el M/ELPS en la Oposición.

IV. Los recursos naturales y la financiación del conflicto

54. En el momento mismo en que la economía de Sudán del Sur corre el riesgo de un colapso, el endeudamiento se eleva de manera pronunciada y las rentas del petróleo declinan, el Gobierno parece estar en condiciones de realizar gastos masivos en la guerra, incluso en concepto de armas, logística y sueldos. Paralelamente, algunas personas y entidades, dentro y fuera del país y dentro y fuera del Gobierno y la oposición, están de hecho extrayendo significativos beneficios financieros de la guerra. Con respecto al Gobierno, ello se debe en parte al régimen de asignación del presupuesto, en el que las facultades de asignación de fondos están concentradas en unas pocas personas.

55. El Grupo de Expertos ha comenzado investigaciones de los canales de financiación utilizados por el Gobierno y la oposición para llevar adelante la guerra y también está investigando a las personas y entidades que se benefician financieramente de la continuación del conflicto. El Grupo de Expertos informará de sus constataciones en los próximos informes de actualización que presente al Consejo de Seguridad, en contexto de los criterios de designación de personas para la aplicación de sanciones establecidos en la resolución 2206 (2015).

A. Petróleo

56. Cuando estalló el conflicto, la producción de petróleo era inferior a los niveles de 350.000 barriles por día registrados en enero de 2012. La lucha en las zonas productoras de petróleo y los ataques directos contra instalaciones petroleras desde entonces han obligado a suspender la producción en el estado de Unidad y también han reducido la producción en el estado de Alto Nilo. La producción total durante la visita de Grupo de Expertos a mediados de julio de 2015 era de 163.000 barriles por día, frente a un nivel de producción de 245.000 barriles por día a finales de 2013.

57. No obstante la caída de los niveles de producción y las rentas del petróleo, el petróleo sigue siendo el pilar de la economía sursudanesa y actualmente representa alrededor del 96% de las rentas fiscales nacionales. Sigue siendo difícil estimar qué cuantía ha gastado el Gobierno directamente en el conflicto desde diciembre de 2013, pero varios factores dan indicios de las vías, la naturaleza y la escala de esos gastos.

58. En primer lugar, cabe mencionar el porcentaje del presupuesto asignado al sector de la seguridad en relación con otros sectores. El examen por el Grupo de Expertos de sucesivas asignaciones presupuestarias al sector de la seguridad desde 2011 muestra un sesgo sustancialmente pronunciado del gasto a favor de asignar más recursos a ese sector a expensas de los pilares del desarrollo, tales como los sectores de la educación, la infraestructura, la salud y la administración pública (véase el anexo VII).

59. En segundo lugar, cabe referirse al nivel de gastos superiores a los previstos en el sector de la seguridad. Las cuantías asignadas al sector en los presupuestos para 2014 y 2015 se han elevado del 32,3% (1.345 millones de dólares) al 36,6% (1.579 millones de dólares). Si bien el aumento tal vez no parezca significativo, el examen realizado por el Grupo de Expertos de sucesivos presupuestos e informes sobre gastos del gobierno desde 2011 muestra que el gasto real es significativamente superior a las respectivas partidas presupuestarias destinadas a otros sectores porque rara vez se respeta el presupuesto en la asignación concreta de los fondos. En cuando al gasto real, el Ministerio de Defensa y Asuntos de Veteranos y el Servicio de Seguridad Nacional en la Presidencia son las principales instituciones que agobian el presupuesto operacional del Gobierno con gastos superiores a los previstos a expensas de otros organismos.

60. Alrededor del 75% de los gastos superiores a los previstos en el presupuesto operacional en el período comprendido entre julio y diciembre de 2014 correspondió al Ministerio de Defensa y Asuntos de Veteranos y la Presidencia. Entre los organismos del Gobierno, la Presidencia ha contribuido de manera significativa a los gastos superiores a los previstos debido a la función ampliada del Servicio de Seguridad Nacional y la limitada transparencia y rendición de cuentas de la Presidencia.

61. Aparte del aumento de las asignaciones presupuestarias con destino al sector de la seguridad y la escala masiva de los gastos superiores a los previstos en dicho sector, dos gastos clave en relación con el conflicto ejemplifican la naturaleza del gasto público en dicha esfera. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica, los representantes del Gobierno gastaron una suma estimada en 98,6 millones de dólares en concepto de participación en las negociaciones de paz, la repatriación de desplazados y las raciones alimentarias para el ejército en el primer semestre del ejercicio económico de 2014. En segundo lugar, el Ministerio informó de un pago de 46,8 millones de dólares a una empresa china, China North Industries Corporation (Norinco), con cargo al presupuesto de mejoras de capital en el segundo trimestre de ese ejercicio económico (véanse los párrs. 70 y 71). El Ministerio de Defensa y Asuntos de Veteranos también hizo un gasto superior a su asignación presupuestaria trimestral por un valor de más de 6,7 millones de dólares y representó también el 58% de un gasto superior al previsto en concepto de sueldos por valor de 103 millones de dólares en el primer semestre de ese ejercicio económico²⁶.

B. Ganadería

62. La ganadería es un medio de subsistencia primordial para gran parte de la población que no participa en la economía formal y un vehículo importante para atesorar riqueza en muchas comunidades. El robo de ganado es una dimensión clave del conflicto. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el conflicto ha alterado negativamente las pautas de migración

²⁶ Estas cifras excluyen las asignaciones destinadas a la policía. El Ministerio del Interior, la policía y el Servicio Penitenciario de Sudán del Sur están agrupados en el sector estado de derecho, lo que significa que su asignación no se suma al grupo temático de la seguridad. Ello no obstante, en realidad funcionan como fuerzas paramilitares y han participado activamente en la guerra, especialmente en los primeros meses.

estacional del ganado (véase el anexo VIII). Los grupos armados saquean los rebaños de las aldeas de las que se apoderan. En la ofensiva del ELPS en el estado de Unidad, en el período comprendido entre abril y junio, las cabezas de ganado fueron los principales trofeos de los miles de jóvenes bul nuer que ayudaron al ELPS. La ofensiva dio a los bul nuer la oportunidad de saquear en gran escala los rebaños de las comunidades nuer en la parte sur del estado de Unidad (véase el anexo V). El robo de ganado ha pasado a ser el fundamento de una relación simbiótica entre el ELPS y muchas de sus milicias aliadas. En el contexto de esa relación, el ELPS trata de destruir al M/ELPS en la Oposición, en tanto sus fuerzas aliadas tratan de robar la mayor cantidad posible de cabezas de ganado al tiempo que coadyuvan a la consecución de los objetivos militares del ELPS.

63. El Grupo de Expertos confirmó durante su visita a Bentiu en junio que, si bien había sido evacuado, en el pueblo había decenas de miles de cabezas de ganado (véase el anexo IX). Antes de la ofensiva, el gobierno del estado había anunciado que las personas que apoyaban al Gobierno debían traer su ganado a Bentiu para protegerlo²⁷. El Grupo de Expertos llegó a la conclusión de que esto se había hecho en anticipación de una amplia operación de robo de ganado en la parte sur del estado de Unidad. Las noticias al fin de junio, después del robo, indicaban que el número estimado de cabezas de ganado en Bentiu ascendía a 100.000²⁷.

C. Saqueos

64. Ambas partes en el conflicto se sirven del saqueo. En una entrevista con Al-Jazeera, un anciano nuer, Gunny Kam, en la aldea de Ping Thou, explicó el empleo de esa filosofía por parte del “Ejército Blanco” afiliado con la oposición. Según Kam, “Nosotros [el ‘Ejército Blanco’] entramos en el conflicto con una sola arma; cuando matamos al enemigo, nos armamos con lo que él tenía en su poder”²⁸. En julio, algunas fuentes del M/ELPS en la Oposición dijeron lo siguiente al Grupo de Expertos: “En nuestro caso, obtenemos recursos del Gobierno: controlamos un pueblo y cuando el ELPS se aproxima, nos retiramos para que ellos lo ocupen. Una vez que se asientan en el pueblo, volvemos al ataque para expulsarlos del pueblo y entonces dejan detrás de sí todo lo que necesitamos”. El Grupo de Expertos estima que la base financiera y de suministros del M/ELPS en la Oposición reside en el seno de una compleja red de alianzas regionales e internacionales, el apoyo de la diáspora y la movilización interna de recursos, y no es tan simple como se dice en esa declaración, que tampoco encuentra corroboración en la naturaleza de las batallas con el Gobierno (véase el párr. 77).

65. El saqueo por parte de elementos del M/ELPS en la Oposición y el “Ejército Blanco” se manifiesta en su enfrentamiento con las fuerzas del Gobierno. Los vídeos de batallas sobre la retirada de las fuerzas del ELPS de Bentiu el 6 de mayo mostraban que cuando los elementos del M/ELPS en la Oposición daban muerte a un soldado del ELPS, despojaban su cadáver de todas las posesiones valiosas (véase el anexo X). El saqueo se ha hecho extensivo a la asistencia humanitaria y la logística, así como a los bancos en los pueblos que han sido tomados.

²⁷ Small Arms Survey, “The conflict in Unity State”; véase www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures/south-sudan/conflict-of-2013-14/the-conflict-in-unity.html.

²⁸ Véase <http://america.aljazeera.com/watch/shows/live-news/2015/7/south-sudans-white-army.html>.

D. Fauna y flora silvestres

66. El Servicio de Fauna y Flora Silvestres de Sudán del Sur y los especialistas en conservación del país informaron al Grupo de Expertos en julio de que la caza furtiva y el tráfico de fauna y flora silvestres habían aumentado desde el inicio del conflicto. El Grupo de Expertos está investigando el nexo entre ese aumento y la expansión de la escala y la continuación del conflicto e informará de sus constataciones en sus próximos informes de actualización al Consejo de Seguridad.

V. Transferencias de armas

67. El suministro de armas y municiones al ELPS y al M/ELPS en la Oposición, así como a las fuerzas afiliadas, ha servido para prolongar y ampliar la escala de la guerra. Ambas partes han violado constantemente sus compromisos de abstenerse de reabastecer a sus tropas con armas y municiones²⁹. El Grupo de Expertos continuará examinando las transferencias, incluidas sus fuentes y las redes de traficantes que las sustentan, así como sus efectos en la guerra y su incidencia en las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario.

68. El Consejo de Seguridad no impuso un embargo de armas a Sudán del Sur en virtud de la resolución 2206 (2015), lo que quiere decir que el Gobierno de Sudán del Sur puede, conforme al derecho internacional, adquirir armas, municiones y otros elementos de equipo y piezas de recambio, así como obtener también el entrenamiento conexo sobre el uso, el mantenimiento o la reparación de esos elementos. De conformidad con la resolución, sin embargo, el Grupo de Expertos está investigando la intervención de los Estados regionales en las transferencias de armas, incluida la posibilidad de adquisiciones hechas por países vecinos en nombre del Gobierno de Sudán del Sur³⁰. El Gobierno, durante el pasado año, firmó acuerdos de cooperación en materia de seguridad tanto con Egipto como con Uganda³¹, pero está obligado a velar por que esas armas, municiones y equipo no se utilicen para violar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

A. Transferencias de armas al Gobierno

1. Helicópteros de ataque

69. El Grupo de Expertos ha obtenido pruebas de la presencia en Sudán del Sur como mínimo de cuatro helicópteros Mil Mi-24, que operan al amparo del pabellón

²⁹ Conforme al artículo 1.2 del Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades de 23 de enero de 2014 y los artículos 1.1 y 1.2 b) de la matriz de modalidades de aplicación del Acuerdo sobre la Cesación de las Hostilidades.

³⁰ Durante el período provisional establecido en virtud del Acuerdo General de Paz, Kenya y Uganda adquirieron armas y municiones en nombre del Gobierno de Sudán Meridional.

³¹ “South Sudan and Uganda sign military cooperation deal”, Sudan Tribune, 15 de octubre de 2014; en www.sudantribune.com/spip.php?article52727; y “South Sudan signs military cooperation deal with Egypt”, Sudan Tribune, 24 de marzo de 2014, en www.sudantribune.com/spip.php?article50407.

sursudanés³². Los helicópteros, que tienen capacidad para transportar ocho efectivos y también capacidad de ataque terrestre, han sido empleados por el ELPS en funciones de apoyo de combate en enfrentamientos recientes en el estado de Alto Nilo, incluso en los alrededores de Kodok (véase el anexo III) y Doleib Hill. El ELPS no poseía helicópteros operacionales con capacidad de ataque terrestre antes del estallido de la guerra. Las imágenes obtenidas por el Grupo de Expertos muestran un aparato Mil Mi-24 del ELPS equipado con dos contenedores de cohetes B8V20 en dos pilones para misiles en el ala auxiliar izquierda, cada uno de los cuales puede disparar 20 cohetes no guiados S-8 de 80 mm. Es probable que los mismos contenedores de cohetes estén montados en el ala auxiliar derecha, con lo cual el helicóptero podría estar armado con un máximo de 80 cohetes (véase la figura I)³³.

Figura I

En la fotografía se observa un soldado del ELPS frente a un helicóptero Mi-24V del ELPS; a la derecha se observa un soldado que porta un fusil IWI-ACE de 7,62x39mm



Fuente: Facebook.com.

³² El análisis ha permitido determinar que se trata de las variantes Mi-24V (Hind E) o Mi-24K (Hind G2) y que ambas pueden estar presentes en el país. En el anexo XI figuran una fotografía y análisis adicionales.

³³ Además de una ametralladora de cuatro cañones YakB-12,7 mm montada en la torrecilla bajo proa, en el Mi-24V se puede montar un total de cuatro misiles radioguiados antitanque 9K114 Shturm (AT-6) en los rieles en forma de hache visibles en la imagen. El Grupo de Expertos no ha obtenido datos probatorios ni de la presencia ni del empleo de esos misiles guiados.

2. Envío de armas de Norinco

70. En julio de 2014, el ELPS recibió un envío de armas, municiones y equipo conexo de Norinco respecto del cual el Grupo de Expertos obtuvo la documentación correspondiente (véase el anexo XII). El envío detallado en la lista de embalaje incluía, entre otras cosas, 100 sistemas de lanzamiento y guía de misiles guiados antitanque HJ-73D, con sus baterías y piezas de recambio, y 1.200 misiles; 9.574 fusiles automáticos tipo 56; y 2.394 lanzagranadas sin soporte de 40 mm y 20 millones de rondas de municiones de 7,62 x 39 mm; 319 ametralladoras tipo 80 de uso general y 2 millones de rondas de municiones de 7,62 x 54 mm; 660 pistolas NP-42 entregadas con 2 millones de cartuchos de 9 x 19 mm; y 40.000 cohetes antitanque tipo 69 de alta potencia explosiva.

71. Los funcionarios sursudaneses han reconocido públicamente la entrega de esos equipos y, en conversaciones privadas con el Grupo de Expertos, declararon que se conformaba al contrato suscrito entre los Gobiernos de China y Sudán del Sur antes del estallido de la guerra³⁴. La documentación del envío aparentemente confirma esa declaración. Se informó posteriormente de que el Gobierno de China había decidido suspender las futuras exportaciones de armas a Sudán del Sur³⁵.

3. Vehículos anfibios

72. En un comunicado de prensa dado el 1 de agosto de 2014, el ELPS anunció la adquisición de 10 “tanques anfibios”³⁶. El Grupo de Expertos ha obtenido prueba visual que confirma la presencia de vehículos anfibios de oruga GAZ-34039 en los estados de Alto Nilo y Unidad (véase la figura II). Esos vehículos tienen capacidad para transportar 10 efectivos, una velocidad terrestre máxima de 60 km/h y una velocidad acuática de 6 km/h. Las imágenes muestran múltiples vehículos que en los que se ha montado, posiblemente después de la entrega, una ametralladora pesada DShK de 12,7 mm.

³⁴ Véase, para un ejemplo público, Ilya Gridneff, “China sells South Sudan arms as its Government talks peace”, Bloomberg, 9 de julio de 2014, en <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-08/norinco-sells-south-sudan-arms-as-chinese-government-talks-peace>.

³⁵ Véase Ilya Gridneff, “China halts arms sales to South Sudan after Norinco shipment”, Bloomberg, 30 de septiembre de 2014, en <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-29/china-halts-weapons-sales-to-south-sudan-after-norinco-shipment>.

³⁶ Véase <http://paanluelwel.com/2014/08/01/spla-army-received-new-weapons-to-defend-the-constitution/>.

Figura II

Soldados del ELPS en el estado de Alto Nilo sobre un vehículo anfibio GAZ-34039 equipado con una ametralladora pesada DShK de 12,7 mm



Fuente: Confidencial.

4. Fusiles ACE

73. El Grupo de Expertos ha obtenido fotografías de la presencia de fusiles automáticos IWI ACE de fabricación israelí como mínimo en dos configuraciones. Por lo menos algunos de los fusiles se entregaron al Servicio de Seguridad Nacional antes del estallido de la guerra, pero ahora el Grupo de Expertos ha observado que se encuentran en posesión del ELPS (tanto del ejército como de la fuerza aérea), la policía nacional y el Servicio de Seguridad Nacional, principalmente tanto de custodios de funcionarios de alto rango como de altos oficiales del ejército.

5. Armas y financiación

74. Las transferencias de armas recientes tienen implicaciones financieras importantes, como lo pone de manifiesto el hecho de que el envío de Norinco representó un valor total de 20.737.925,00 dólares³⁷. Los nuevos helicópteros de ataque Mi-24V tienen un valor mínimo de 10 millones de dólares. Si bien parece improbable que Sudán del Sur haya podido adquirirlos como aeronaves nuevas, los helicópteros representan un valor financiero significativo, con costos operativos adicionales que ascienden, como mínimo, a varios miles de dólares por semana por unidad en concepto de logística, combustible, piezas de recambio y personal³⁸. Gastos similares se deben hacer para los demás elementos de equipo, por ejemplo los carros de combate principales y piezas de artillería.

³⁷ Para información respecto de la forma en que el gasto de defensa se tradujo en un gasto decreciente en salud, educación, entre otros sectores, véase la sección IV.

³⁸ El Grupo de Expertos continúa investigando si el uso de los helicópteros es resultado de una adquisición o un arrendamiento.

75. El Grupo de Expertos ha obtenido de una fuente confidencial del ELPS documentación que presenta un resumen consolidado de recursos necesarios correspondiente a un “presupuesto de emergencia” para el período comprendido entre enero y julio de 2014 en relación con las necesidades de las fuerzas gubernamentales (véase el anexo XIII). El Grupo de Expertos no estima que los elementos que se enumeran en el documento hayan sido adquiridos exactamente como lo sugiere el ELPS. Sin embargo, la cifra total de 2.533.187.831,99 libras sursudanesas (más de 850 millones de dólares al tipo de cambio oficial) da una idea de los parámetros financieros de las deliberaciones relacionadas con la presupuestación del ELPS. Demuestra asimismo que, aparte del reclutamiento en gran escala, la adquisición de equipo adicional estaba prevista desde el comienzo mismo del conflicto como opción normativa central para contrarrestar la pérdida de divisiones formadas que se habían pasado al M/ELPS en la Oposición (véase el anexo X).

B. Transferencias de armas al M/ELPS en la Oposición

76. En su calidad de movimiento de oposición, el M/ELPS en la Oposición carece de acceso a material bélico por conducto de transacciones oficiales entre Estados. Es de suponer que en un principio utilizó las armas y municiones tomadas por las fuerzas que habían desertado del ELPS, en particular las divisiones VIII y IV, al mando de los Generales de División Peter Gadet Yaak y James Koang Chuol, respectivamente. En mayo, el General de División Johnson Olony desertó del ELPS, al cual se había integrado dos años antes, y lo hizo con un arsenal sustancial de armas y municiones que el ELPS había suministrado a sus fuerzas.

77. Sin embargo, son limitadas las posibilidades de que continúen los saqueos de grandes volúmenes de armas y municiones de la otra parte. Muchas veces, tan pronto una de las partes se aproxima y se echa de ver con claridad que puede tener una preponderancia de fuerzas, la otra parte se retira llevándose, dentro de lo posible, su equipo, lo cual disminuye la posibilidad de saquear arsenales y depósitos de municiones. Habida cuenta de que los combates se vienen librando desde hace 19 meses con tiroteos frecuentes entre ambas partes, un reclutamiento persistente y la ausencia de una industria nacional de armamentos, ambas partes necesitan reabastecimiento externo, especialmente de municiones, para continuar la lucha.

78. El Gobierno de Sudán del Sur ha acusado repetidamente al Sudán de abastecer al M/ELPS en la Oposición con armas y municiones, acusación que Jartún —aunque no uniformemente el M/ELPS en la Oposición— niega³⁹. Dos organizaciones de investigación, Small Arms Survey y Conflict Armament Research, han documentado la presencia de municiones de varios países en las existencias tomadas por fuerzas gubernamentales al M/ELPS en la Oposición. Entre ellas figuran municiones sudanesas producidas en 2014 que, muy probablemente, fueron el resultado de entregas aéreas por parte de una fuente externa con destino al M/ELPS en la Oposición⁴⁰.

³⁹ Véase “Sudan denies accusations of South Sudanese rebel support”, *Sudan Tribune*, 19 de mayo de 2015, en www.sudantribune.com/spip.php?article55019.

⁴⁰ Véanse Conflict Armament Research, “Weapons and ammunition airdropped to SPLA-IO forces in South Sudan” (mayo de 2015) en www.conflictarm.com/wp-

C. Efectos del reabastecimiento de armas y municiones

79. Tanto el Gobierno como el M/ELPS en la Oposición aducen que los combates se libran únicamente en legítima defensa y que necesitan municiones con fines defensivos. La escala de los combates, la enorme magnitud de las violaciones de los derechos humanos y la dinámica del conflicto llevaron al Grupo de Expertos a la conclusión de que ese razonamiento no es verosímil⁴¹. El constante reabastecimiento de armas y municiones de ambas partes ha permitido continuar y aumentar la escala de la guerra hasta su magnitud actual, con el resultado de violaciones en gran escala del derecho internacional humanitario⁴².

80. El Grupo de Expertos considera que el suministro de equipo militar más grande, particularmente al ELPS, forma parte de una tentativa persistente del Gobierno por alterar la dinámica de la guerra. En 2014, la lucha disminuyó durante la temporada de lluvias, pues los caminos eran intransitables⁴³. El ELPS se encontraba en ese período en una situación de relativa desventaja, en comparación con el M/ELPS en la Oposición, cuyos efectivos provenían de las zonas en las que estaban luchando y, por ende, estaban más familiarizados con el terreno. El ELPS tuvo menos posibilidades de desplegar y utilizar su superioridad en cuanto al número de tanques y piezas de artillería durante ese período, en tanto el M/ELPS en la Oposición se valía más de armas pequeñas y armas ligeras y de una mayor movilidad en terrenos difíciles. Si bien los meses de julio y agosto se consideran los meses punta de la temporada de escasez (es decir, los meses inmediatamente anteriores a la nueva cosecha que típicamente son los de mayor inseguridad alimentaria para la población civil en zonas rurales), la pausa en los combates presumiblemente da a los civiles en las zonas de conflicto un cierto respiro en cuanto los ataques de ambas partes.

81. La adquisición por el ELPS de una mayor capacidad aérea y fluvial forma parte de una estrategia para reducir esa desventaja táctica, dado que los vehículos anfibios y los helicópteros de ataque le permiten continuar la lucha en zonas que antes se consideraban inaccesibles debido a las lluvias. El ELPS ha utilizado sus helicópteros de ataque en el estado de Alto Nilo contra fuerzas de la oposición y civiles de la otra ribera del Río Nilo. Durante la ofensiva en el estado de Unidad de abril a junio, el ELPS desplegó vehículos anfibios GAZ para perseguir a efectivos del M/ELPS en la Oposición y civiles en dirección hacia los pantanos del Sudd, donde habían buscado refugio los civiles que huían de la violencia⁴⁴.

content/uploads/2015/06/Weapons_and_ammunition_airdropped_to_SPLA-iO_forces_in_South_Sudan.pdf; y Small Arms Survey, “Small arms ammunition documented at Bentiu mosque” (mayo de 2014), en www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/facts-figures/arms-ammunition-tracing-desk/HSBA-Tracing-Desk-Bentiu-July-2014.pdf.

⁴¹ El Mecanismo de Vigilancia y Verificación de la IGAD ha documentado múltiples violaciones por ambas partes del artículo 1.1 del Acuerdo de Cesación de las Hostilidades, que se refiere a la obligación de cesar todas las operaciones militares.

⁴² En el anexo III se presentan estudios monográficos (Kodok y estado de Unidad Septentrional).

⁴³ Para una fuente pública, véase www.hrw.org/report/2015/07/22/they-burned-it-all/destruction-villages-killings-and-sexual-violence-unity-state.

⁴⁴ Véase www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2014/conflict-alert-looming-military-offensives-in-south-sudan.aspx. La temporada de lluvias corresponde aproximadamente al período de mayo a octubre.

82. Las armas pequeñas y las armas ligeras siguen siendo las preferidas de muchos combatientes de ambas partes, pues son de bajo costo y fáciles de transportar, requieren poco adiestramiento y resulta comparativamente fácil adquirirlas⁴⁵. Las armas pequeñas, en particular del tipo AK⁴⁶, se encuentran en poder de ambas partes y también han figurado de manera prominente en los robos de ganado entre diferentes grupos étnicos y en los combates entre el ELPS y las milicias en el período provisional establecido en virtud del Acuerdo General de Paz⁴⁷.

83. El país está fuertemente militarizado y la capacidad del Gobierno para mantener el orden público en muchas partes del país o controlar las armas en manos de sus efectivos es limitada, lo que significa que la continua importación por ambas partes de armas pequeñas y armas ligeras y de sus municiones tendrá una repercusión duradera sobre la paz y la estabilidad en Sudán del Sur y reforzará la probabilidad tanto de violencia política armada como de fragmentación. La hipótesis más ajustada a la realidad es la que supone que la afluencia de armas pequeñas y armas ligeras ha de significar que, incluso de haber un acuerdo político, la gran inseguridad y la violencia intercomunal seguirán siendo un elemento característico de la vida sursudanesa en el futuro previsible y, dada la naturaleza porosa de las fronteras, continuarán incidiendo negativamente en la seguridad de los Estados vecinos.

VI. Recomendaciones

84. El Grupo de Expertos recomienda:

Sanciones

a) Que, cuando el Comité examine nuevas designaciones de personas, a la luz del grave deterioro de la situación sobre el terreno y de la amenaza que la guerra en Sudán del Sur plantea para la paz y la seguridad internacionales y para lograr los objetivos establecidos por el Consejo de Seguridad en la resolución 2206 (2015), a saber, una paz inclusiva y sostenible en Sudán del Sur, dichas designaciones incluyan a todos los responsables de la adopción de decisiones con facultades para perpetuar la guerra o bien para ponerle fin que deriven beneficios económicos y políticos del conflicto y/u otras personas que sean responsables por la comisión de crímenes graves tipificados por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos;

b) Que, en la medida en que el régimen de sanciones tiene por objeto alterar los cálculos de las partes y fomentar la paz en Sudán del Sur, los miembros del Consejo de Seguridad emprendan una campaña de divulgación pública sostenida,

⁴⁵ El Grupo de Expertos se guía por la definición de armas pequeñas y armas ligeras que figura en el Instrumento internacional para permitir a los Estados identificar y localizar, de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas.

⁴⁶ Abarcan diferentes variantes del fusil AK-47 original, incluidas las variantes AKM y AKM-S y las producidas en los antiguos Estados signatarios del Pacto de Varsovia, y variantes como el fusil tipo 56-1 de fabricación china.

⁴⁷ A guisa de ilustración, cabe mencionar lo siguiente: el 16 de junio el Grupo de Expertos fue testigo del paso de más de 8.000 jóvenes bul nuer frente al sitio de protección de civiles de la UNMISS en Rubkona; aproximadamente el 80% de esos jóvenes iban armados, en su vasta mayoría con fusiles automáticos de tipo AK.

concertada y de gran escala en el país a fin de crear conciencia y apoyo en relación con el régimen de sanciones y las designaciones actuales y futuras y también para combatir la información errónea acerca del régimen de sanciones, habida cuenta de las bajas tasas de alfabetización y del acceso limitado a la televisión y la internet en Sudán del Sur;

Embargo de armas

c) Que el Consejo de Seguridad prohíba el suministro, la venta o la transferencia a Sudán del Sur, desde los territorios de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a través de esos territorios o por parte de nacionales de esos Estados Miembros, o por medio de naves o aeronaves que enarbolen su pabellón, de armas y equipo conexo de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militares, equipo paramilitar y piezas de recambio para dichos elementos de equipo, y asistencia técnica, capacitación, asistencia financiera o de otra índole en relación con las actividades militares o el suministro, el mantenimiento o el empleo de armas y equipo conexo, en particular el suministro de cualquier forma de adiestramiento por fuerzas extranjeras o personal mercenario armado, se originen o no en sus territorios;

d) Que las modalidades de aplicación del embargo de armas se examinen en estrecha cooperación con la Unión Africana y la IGAD y estatuyan las disposiciones necesarias respecto de posibles excepciones para suministros destinados a garantizar la seguridad de la UNMISS, los organismos de las Naciones Unidas, las misiones diplomáticas, los agentes humanitarios y los medios de difusión internacionales, y que se confiera a la UNMISS el mandato de vigilar la aplicación del embargo y se la dote de los medios necesarios para hacerlo de manera eficaz;

e) Que en el caso de que se llegue a un acuerdo entre las partes que establezca una tercera fuerza distinta de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, se exija que los Estados Miembros que contribuyan efectivos a esa fuerza notifiquen al Comité y al Grupo de Expertos, antes de la transferencia al territorio de Sudán del Sur:

- i) El tipo, la cantidad y las especificaciones técnicas precisos de las armas, municiones, equipo militar y/o materiales que se hayan de entregar y/o la asistencia que se haya de suministrar;
- ii) Los medios de transporte que se hayan de utilizar para el suministro del equipo;
- iii) La fecha propuesta de entrega;
- iv) El lugar específico de entrega en Sudán del Sur.

f) Que, en el caso de que se firme y aplique efectivamente un acuerdo de paz entre las partes en el conflicto, la capacitación o el apoyo en las siguientes esferas queden exceptuados del embargo, con sujeción a la aprobación por escrito del Comité:

- i) La observancia del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos;
- ii) La reforma del sector de la seguridad, en particular el fomento de la rendición democrática de cuentas;

- iii) Las iniciativas para combatir la caza furtiva y otras formas de tráfico de fauna y flora silvestres;
- iv) Las medidas encaminadas a reducir el riesgo de filtraciones, pérdidas, desvíos o robos de arsenales del Gobierno, incluso mediante un sistema integral de registro de las armas y municiones de propiedad del Gobierno;
- g) Que, a la luz de las preocupaciones expresadas por el Grupo de Expertos en cuanto a la capacidad de Sudán del Sur para defenderse en el contexto de una región inestable y habida cuenta de la ya sustancial proliferación de armas pequeñas y armas ligeras en manos de la población civil, el Consejo de Seguridad haga saber claramente a las partes desde el principio que el embargo de armas es una medida temporaria que se podrá levantar sujeta a las siguientes condiciones:
 - i) La firma y aplicación efectiva de un acuerdo de paz, incluida la constitución de un gobierno de transición;
 - ii) Las mejoras por parte de todas las fuerzas organizadas de Sudán del Sur en la esfera de las medidas de seguridad física y gestión de arsenales, en particular un régimen amplio de marcación y registro de armas y municiones de propiedad del Gobierno, con miras a reducir el riesgo de filtraciones, pérdidas, desvíos o robos de arsenales del Gobierno, de conformidad con el Protocolo de Nairobi para la Prevención, el Control y la Reducción de las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras en la Región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África;
 - iii) La mejora del mantenimiento de la seguridad a nivel comunitario, a fin de reducir de ese modo la necesidad percibida por los civiles de munirse de armas para su legítima defensa;

El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

- h) En el marco de esfuerzos más amplios por poner fin a la impunidad generalizada que se traduce en violaciones de las disposiciones aplicables del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y que contraviene el régimen de sanciones impuesto en virtud de la resolución 2206 (2015):
 - i) El Consejo de Seguridad, en consonancia con la declaración de la Presidencia de fecha 24 de marzo de 2015 (S/PRST/2015/9), inste enérgicamente a la Unión Africana a dar a conocer públicamente el informe de la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur sin más demora e independientemente de los resultados del proceso de la IGAD;
 - ii) El Consejo de Seguridad, en consonancia con sus consultas oficiosas del 12 de mayo cuando examinó un documento preparado por la Secretaría sobre el tema, examine además, con carácter prioritario, las opciones para imputar responsabilidad criminal y establecer una justicia de transición en Sudán del Sur con objeto de enjuiciar los crímenes graves cometidos desde el comienzo de la guerra.

Annex I

**Table of correspondence sent and received by the Panel
from 18 May to 31 July 2015**

<i>Country/other entity</i>	<i>Number of letters sent</i>	<i>Requested information fully supplied</i>	<i>Information partially supplied</i>	<i>No answer</i>	<i>Pending^a</i>
South Sudan	5	3		1	1
SPLM/A in Opposition	1				1
Ethiopia	1	1			
United Nations Office to the African Union	1	1			
Uganda	2	2			
Sudan	2	2			
African Union Peace and Security Council	1			1	
Israel	2	1			1
China	1				1
Total	16	10		2	4

^a The reply deadline has not yet expired.

Annex II

Humanitarian crisis in South Sudan

1. Since the adoption of Resolution 2206 (2015), 100,000 additional people have been displaced within the country, bringing the total number of internally displaced persons (IDPs) to over 1.6 million.¹ Of that total, 166,142 are living in six Protection of Civilian (PoC) sites located on UNMISS bases.² This represents an increase of 64,000 civilians seeking shelter in PoC sites in the last eight months since the end of 2014. This sharp increase is putting enormous pressure on the limited living space and services available, particularly in the two largest sites in Malakal, Upper Nile State and Bentiu, Unity State, which is hosting over 62% of all IDPs.
2. In addition to the internally displaced population, 753,000 people have fled South Sudan and are now living as refugees in neighbouring countries, with 83% having fled since 15 December 2013.³ Some 90% of these new refugees are women and children.⁴ The majority of these refugees are living in vulnerable border areas, putting further strain on the host communities.
3. The number of people facing severe food insecurity has almost doubled since the start of 2015 to an estimated 4.6 million people,⁵ including 250,000 children severely malnourished — the highest numbers since the conflict began in December 2013.⁶ The actual number will most likely be higher as these estimates were calculated prior to the current upsurge in fighting in Greater Upper Nile since April, which significantly disrupted humanitarian

¹ Humanitarian Bulletin, Bi-weekly Update on South Sudan (15 July 2015). Available from https://docs.unocha.org/sites/dms/SouthSudan/2015_SouthSudan/South_Sudan_15_July_2015_Humanitarian_Bulletin_01.pdf, accessed on 20 July 2015; Humanitarian Bulletin, Monthly Update on South Sudan (31 March 2015). Available at <http://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-bulletin-monthly-update-march-2015>, accessed on 25 July 2015.

² As at 15 July 2015, the displaced people were divided amongst the 6 PoC sites as follows: 103,913 in Bentiu (Unity State); 28,663 in Juba UN House (Central Equatoria); 30,410 in Malakal (Upper Nile State); 2,289 in Bor (Jonglei State); 665 in Melut (Upper Nile State); and 202 in Wau (Western Bahr el Ghazal State). The Panel learned on 23 July the number of IDPs in the largest site of Bentiu had swelled to 115,983, which is more than a 10% increase over a 1-week period.

³ UNHCR. South Sudan Situation: Regional Overview of Population of Concern (as of 22 July 2015). Available at http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SSD_Situation_RegionalOv_POC_150722.pdf. Accessed on 28 July 2015.

⁴ The majority of refugees are in Ethiopia, with on average some 180 South Sudanese refugees arriving every day. Ethiopia now hosts the largest refugee population of any African country, with over 281,514 South Sudanese refugees in addition to some 425,000 refugees of other nationalities. Sudan has seen the highest arrival rate in 2015, with more than 38,000 entering the country in June alone, bringing the total number of South Sudanese there to 198,657. Uganda is now hosting 181,389 and Kenya 91,553 South Sudanese refugees. See <http://www.unhcr.org/pages/49e483986.html>.

⁵ Integrated Food Security Phase Classification, South Sudan report, May 2015. Available on http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_SouthSudan_May2015_FullReport.pdf, accessed on 15 June 2015; FEWSNET alert. “South Sudan. Some households face Catastrophe as food aid delivery remains blocked and prices spike”, available at <http://www.fews.net/east-africa/south-sudan/alert/june-24-2015>, accessed on 30 June 2015.

⁶ In total, nearly 70 per cent of the country’s population — 7.9 million out of 11.6 million people — are expected to face food insecurity this rainy season, or so-called lean season.

assistance and resulted in loss of livelihoods due to cattle raiding and wilful destruction of crops and seeds.

4. About 750,000 people have been affected by the recent violence in Unity State alone. OCHA reports that 138,000 of those who were receiving humanitarian assistance prior to the upsurge of violence are now without that assistance due to insecurity.⁷ Some have fled to the PoC site in Bentiu. Others — humanitarian organizations estimate tens of thousands in Unity State alone⁸ — have fled into the bush and swampy areas prone to flooding. They are effectively cut off from aid and living in the most dire conditions, putting them at acute risk of disease and famine.
5. Deepening food insecurity is not only a result of protracted conflict but also of limited market functionality as many roads are not passable during the rainy season, steep depreciation of the currency, rising inflation, and a high cost of living. 610,000 people living in South Sudan's urban areas are now struggling with the fact that the cost of living has increased by nearly 30% in the first half of 2015.⁹
6. In addition to food and livelihoods support, acute humanitarian needs of the population include infectious disease control,¹⁰ education, protection, water and sanitation assistance, shelter, non-food items, and health care.
7. South Sudan also continues to receive refugees from neighbouring Sudan — currently 265,887 people, mostly from Sudan, putting further pressure on the country's limited resources.¹¹
8. Finally, scores of civilians have died as a direct result of the war. Shockingly, no one knows how many, as no one is keeping track.¹²

⁷ Actual numbers of people no longer receiving aid will be higher due to the level of violence.

⁸ Humanitarian Bulletin, Bi-weekly Update on South Sudan (30 June 2015). Available from https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/ocha_south_sudan_biweekly_30_june_2015.pdf, accessed on 10 July 2015.

⁹ Integrated Food Security Phase Classification (IPC), the Republic of South Sudan, May 2015 Food Security and Nutrition Analysis, Key Messages, p. 1; and FAO, "Sky-rocketing Food Prices in South Sudan are Deepening Food Insecurity", 2 July 2015, <http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/296963/>.

¹⁰ In most recent months, water-borne infectious diseases have become a particular concern, due to the onset of the rainy season, combined with inadequate shelter and sanitary conditions of people hiding in swamps, overcrowding in PoC sites, limited access to large swathes of the country due to insecurity, and inadequate access to safe drinking water across the country. A cholera outbreak was declared on 23 June 2015, with as of 26 July 2015, a total of 1,375 cholera cases including 42 deaths (CFR 3%) reported, according to the World Health Organization (Situation report on Cholera in South Sudan No. 35 (26 July 2015). Available on <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation%20Report%20Issue%20%2335%2C%2026%20July%202015%20on%20Cholera%20in%20South%20Sudan.pdf>, accessed on 28 July).

¹¹ UNHCR. South Sudan Situation. Ibid.

¹² AFP article. "50,000 and not counting. South Sudan's war dead." (15 November 2014). Available at <http://reliefweb.int/report/south-sudan/50000-and-not-counting-south-sudans-war-dead>, accessed on 10 June 2015.

Annex III

Hospital in Kodok, Upper Nile State

1. On 5 July, a hospital in Kodok, Upper Nile State, was caught in the crossfire during heavy fighting between the government forces and SPLM/A in Opposition forces under the leadership of Johnson Olony. Two people were killed and 11 others were injured. Doctors and nurses were forced to leave the hospital, which meant a further 11 patients died after they had left.¹ The attack involved the use of rockets fired from a helicopter. Only SPLA forces in that area have helicopters at their disposal. Therefore the Panel is almost certain the rockets were fired from an SPLA-controlled helicopter. As the Mil Mi-24 is the only SPLA helicopter with a direct ground attack capacity, the Panel furthermore finds it highly probable that the rockets were fired from a Mil Mi-24 variant helicopter.
2. The hospital was supported by medics from the International Committee of the Red Cross (ICRC). About 70 patients were being treated at the hospital before the fighting. The hospital serves tens of thousands of people in the local community, with up to 700 consultations every week. A Red Cross mobile surgical team, including five doctors and nurses, had been based at the hospital. At a time when expert health care is desperately needed, the ICRC has been forced to suspend its medical work in Kodok until the security situation improves.²
3. It was the second time the hospital got caught in the crossfire and the medical staff had to be evacuated.
4. The Panel has written to both the SPLA and the SPLM/A in Opposition, requesting further information regarding the incident and is currently awaiting a reply.

Conflict pattern affecting medical staff and facilities:

5. This is only one example of a pattern affecting medical staff and facilities in South Sudan. Since the start of this conflict, hospitals have become targets of attack and brutality.³ On 26 February 2014, MSF reported on the attack on two of the hospitals they had been supporting. In Malakal, Upper Nile State, patients had been murdered inside the town's Teaching Hospital. And in Leer, Unity State, the hospital was thoroughly looted, burned and vandalized.⁴ In Bentiu, Unity State, 19 civilians were killed by SPLM/A in Opposition forces in the Civil Hospital on 15 April 2014.⁵

¹ Report from British Red Cross. Available at <http://reliefweb.int/report/south-sudan/watch-aid-worker-describes-tragic-scene-after-hospital-attack>, accessed on 20 July 2015.

² Ibid.

³ "South Sudan: medical care under fire" (26 February 2014), MSF article available on <http://www.msf.org.uk/article/south-sudan-medical-care-under-fire>, accessed on 20 July 2015.

⁴ Ibid.

⁵ UNMISS, Attacks on Civilians in Bentiu & Bor April 2014 (January 2015). Available at http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/UNMISS_HRDJanuary2015.pdf, accessed on 27 July 2015.

Violation of International Humanitarian Law:

6. The Panel learned that both the SPLA and SPLM/A in Opposition forces were aware of the location of the hospital. In addition, the hospital was clearly marked with the red cross symbol that was visible from both the air and the ground. Kodok is a relatively small town, right on the frontline between both parties. Both parties are familiar with the area and knew they were operating in very close vicinity of a civilian object and that the risk was very high that it would be damaged and/or people inside would be hurt as a result of extensive shelling of the town.
7. Under international humanitarian law, hospitals have a protected status and should never be the object of attack. Parties to a conflict (whether states or non-state armed groups) should only target military objectives and not the civilian population or individual civilians or civilian objects. Failing to make this distinction in military operations represents an indiscriminate attack and is a war crime. Although it is understood that it is not possible for parties to a conflict always to avoid civilian casualties when engaged in military operations, nevertheless all parties must take all possible precautions in any attack to minimize civilian deaths and injuries. On the basis of its preliminary investigation, the Panel concludes it has sufficient evidence to establish that when they engaged in fighting in Kodok, the parties did not take sufficient precautionary measures to avoid impacting the hospital.

Annex IV

SPLM/A in Opposition attack on Bentiu, 29 October 2014

1. According to multiple open sources, the SPLM/A in Opposition attacked Bentiu, the capital of Unity State, on 29 October 2014. As has often been the case during the conflict in South Sudan, the attack was accompanied by reports that civilians were deliberately targeted by armed elements.¹

Context:

2. Unity State has been the subject of continuous fighting since the beginning of the war in South Sudan in December 2013. Bentiu is nationally significant as the capital of the only Nuer-majority state in South Sudan. Unity State is oil-producing and receives additional oil revenue under the Transitional Constitution. This makes Bentiu the politically potent key to control the oil wealth generated in Nuer areas.²
3. Prior to this attack, the SPLA had been in control of Bentiu, even if its control was tenuous at best. The government had little control over the southern counties of Unity State and skirmishes in areas outside Bentiu had been frequent. Rumours of an impending attack by SPLM/A in Opposition forces on Bentiu and Rubkona had been circulating for months.³

The attack:

4. On 29 October, the SPLM/A in Opposition forces surrounded Bentiu moving in from the north, and from bases in Guit county in the south-east, and from Rubkona in the south-west.⁴ The tribal composition of the forces and the chains of their command have not been identified with sufficient measure of certainty. On the basis of the prevailing areas of habitation, as well as taking into consideration the split that occurred among the Nuer since December 2013 in Unity State, it could be surmised that the attackers belonged to Jagei, Jikany and Dok Nuer clans, although some of the Bul Nuer should not be excluded. At that time, General Peter Gadet, a Bul Nuer from Mayom County, was the Chief of Staff of the SPLM/A in Opposition forces. According to the SPLM/A in Opposition, they were forced to take control of the oil-rich town due to the aggressive action of the SPLA against their defence positions.⁵ It does not seem to be a well-motivated pretext, given Unity State's largest oil-fields are almost entirely in its southern counties (Koch, Payendit, Leer, Panyijar). According to the South Sudan Constitution, 3% of oil revenues

¹ UNMISS Special Report: Attack on Bentiu, Unity State, 29 October 2014 (19 December 2014). Available at <http://unmiss.unmissions.org>, accessed on 23 July 2015.

² Food Security Cluster. Situational Analysis: Bentiu (4 December 2014). Available at <http://foodsecuritycluster.net/sites/default/files/Bentiu%20situation%20analysis%20public%20FINAL.pdf>, accessed on 23 July 2015.

³ UNMISS Special Report. Ibid.

⁴ HSBA Facts & Figures: The Conflict in Unity State (29 January 2015). Available at <http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/facts-figures/south-sudan/HSBA-Conflict-Unity-Jan-2015.pdf>, accessed on 23 July 2015.

⁵ Sudan Tribune. S. Sudan rebels claim control over Bentiu amid government denials. (30 October 2014). Available at <http://www.sudantribune.com/spip.php?article52884>, accessed on 23 July 2015.

should be re-invested in the communities in whose territories the oil-fields are located, and 2 % remain with the State authorities. If the SPLA were to attack these areas and take control over them, this would not only undermine the power base of the SPLM/A in Opposition, but would also provide Juba with vital resources for sustaining the war effort. In October 2014, such a goal seemed to be achievable, therefore the opposition wanted to prevent the SPLA from launching an offensive in southern Unity State. It was clear from the start this offensive would further imperil the already dire humanitarian situation.⁶

Gross human rights abuses:

5. At least 11 civilians were reportedly killed by SPLM/A in Opposition when they tried to retake control of the city from the government on 29 October 2014. Reports also indicated that civilians were deliberately targeted because of a perceived association with government forces. In one instance, 14 men were taken from the Bentiu Catholic Church, where they had sought sanctuary. They had to walk to a nearby cemetery, where at least eight of them were shot and killed, two were wounded, while four remained unharmed. Other civilians hiding in the Church were beaten with sticks. In another incident during the attack, two women and a baby were killed in their homes.⁷
6. The UNMISS Human Rights Division also received multiple testimonies indicating that women were victim of abduction and rape by SPLM/A in Opposition forces after government forces withdrew. At least 20 women were abducted and forced to carry wounded SPLM/A in Opposition fighters or were told that they were being taken to their new husbands. One witness reported that as women were being taken out of Bentiu, some were picked from the group by SPLM/A in Opposition fighters and taken into the bush, where they may have been sexually assaulted. Another survivor described how on the way to Guit, some women were forced to have sex with multiple armed elements at night, otherwise they would have been killed.⁸ The Panel learned from confidential sources that for 3 nights in a row, these women were raped by SPLM/A in Opposition fighters in turns and that each woman was raped by at least 8 men. After 3 days and nights of walking, they were released. Five women returned to Bentiu on 1 November but four others could not return with them because of the injuries and fatigue they had sustained due to being abused and raped. It is not known what happened to them afterwards, but witnesses suggested they would follow when they had recovered. It is also not known what happened to the other 11 women who were abducted.

Conclusions:

7. The motive for killing these civilians seemed to be to punish the Nuer families who had “betrayed” the Nuer community by accepting to live within Bentiu town under control of the government. According to the UNMISS Special

⁶ “IGAD mediators condemn violence in South Sudan’s Unity State; call on opposition forces to immediately cease hostilities”, IGAD press statement, 29 October 2014.

⁷ Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General. Human rights situation in South Sudan (27 March 2015). A/HRC/28/49.

⁸ UNMISS Special Report. Ibid.

Report, alleged perpetrators of the attacks referred to Nuer victims as “Dinka” — apparently to denote their perceived support for the government.⁹

8. The abduction and beating of civilians who sought refuge at a place of worship is particularly shocking. Such places of worship are protected under international humanitarian law.

⁹ UNMISS Special Report. Ibid.

Annex V

April-July 2015 Unity State offensive by SPLA and associated armed groups

1. In recent months, various open sources have reported on the SPLA's most recent offensive in Unity State. Both from these secondary and from multiple primary sources, the Panel has learned that this offensive was marked by particularly brutal violence targeting civilians. The Panel has found that the SPLA armed forces were intent on rendering communal life unviable and prohibiting any return to normalcy following the violence. All interlocutors the Panel has interviewed indicated that this strategy was driven by the objective of completely destroying the SPLM/A in Opposition's support base at all costs. The intensity and brutality of violence aimed at civilians is hitherto unseen, in what has been so far — without a doubt — an incredibly violent conflict, where civilians have been targeted by all parties to the conflict, thereby definitively changing the dynamics of the conflict.

Context:

2. Eighteen months after the start of the conflict in December 2013, during which the scale and intensity of fighting has vacillated, fighting flared up again in April 2015.¹ In April and May 2015, the SPLA pushed south from Bentiu, the state capital, rapidly overrunning SPLM/A in Opposition positions in Guit and Koch counties, before attacking Leer county. SPLA forces also pushed northeast from Lakes and Jonglei States, and attacked SPLM/A in Opposition positions and villages in Mayendit and Panyijar Counties. Having driven the SPLM/A in Opposition from southern Unity — the wellspring of rebel support in the state — much of the SPLA involved in the offensive withdrew to Bentiu, before attacking Panakuac, the main SPLM/A in Opposition military base on the Sudanese border, and routing the rebels, who fled into the Sudan.²
3. A second wave of attacks followed in June, when particularly Bul Nuer youth from Mayom — some of whom were returning from Panakuac, others coming from Mayom — moved to primarily Guit to attack remnants of the SPLM/A in Opposition and civilians, and mostly to raid cattle.

The attacks:

4. The offensive seemed to consist of well-coordinated attacks. Regular (i.e. not consisting for the majority of recently integrated former militias members) SPLA forces moved up from Lakes State (overland) and by barge (from Bor). These troops reinforced the SPLA Division IV forces and the Bul Nuer youth who came down from Pariang and Maban. The offensive also saw the integrated use of amphibious vehicles, tanks, Armoured Personnel Carriers

¹ UNMISS. Flash Human Rights Report on the Escalation of Fighting in Greater Upper Nile. April/May 2015 (29 June 2015). Available at <http://unmiss.unmissions.org>, accessed on 30 June 2015.

² HSBA Facts & Figures: The Conflict in Unity State (3 July 2015). Available at <http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures/south-sudan/conflict-of-2013-14/the-conflict-in-unity.html#c1690>.

(APC), and infantry to great effect — something the SPLA has not always done in the past.

5. The Panel's sources confirmed that the SPLM/A in Opposition seemed to have offered little resistance, instead preferring to retreat into the swamps when the offensive started.
6. Youth fled the villages with their cattle, usually leaving women, elderly, and children behind, including those physically unable to move. Some interlocutors went so far to say that, because the SPLM/A in Opposition offered this little resistance, they effectively left the civilians to bear the brunt of the offensive as they knew the SPLA and their allied forces would not be able to tell for certain who were civilians and who were armed elements.³

Gross human rights abuses:

7. During its field visits to Bentiu on 15-16 June and 8-10 July, the Panel interacted with a wide variety of interlocutors. This included UNMISS, humanitarian agencies and NGOs, IDPs and government officials. The Panel also visited the Bentiu POC sites on both occasions.
8. The Panel found that the SPLA implemented a so-called "scorched earth policy" throughout their Unity State offensive.⁴ Government allied forces consistently razed entire villages to the ground; burning down houses — sometimes with occupants inside; looting cattle, other livestock and any valuables; and destroying and vandalising key infrastructure such as schools and hospitals. Furthermore, they undertook indiscriminate killings of civilians; beat and tortured civilians; raped women; and abducted young girls and boys.⁵ The violence led to mass civilian displacement with thousands of people forced to flee to the bush and swampy areas where they lack food and water. Some of them managed to flee to the UNMISS POC Site in Bentiu, but tens of thousands have effectively been cut off any humanitarian aid, trying to find a way to survive in swamps.
9. Children have been particularly affected, as reports indicated that many have been killed, raped — including children as young as seven —, abducted or recruited to take part in the fighting throughout the state. Chillingly, witnesses confirmed to the Panel that children were also sometimes the perpetrators of the destruction of villages and crimes committed against the civilian population, as they have been forcibly recruited to fight alongside the SPLA and allied forces. Fighting in Unity also resulted in attacks on schools. In May, three schools were reportedly vacated but 29 schools were being used for military purposes.⁶

³ Various interviews with the Panel in Juba in June and July.

⁴ Interview with high-level UNMISS representatives, Juba, 16 June 2015.

⁵ IGAD MVM, Violation 43 report (8 July 2015). Available at <http://southsudan.igad.int/index.php/2014-08-07-10-16-26/2014-08-07-10-30-57> & interviews with confidential sources.

⁶ OCHA Humanitarian Bulletin South Sudan (30 June 2015). Available at <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/south-sudan/coordination-and-common-services> & UNICEF statement (18 May 2015). Available at http://www.unicef.org/esaro/5440_ss2015_children-attacked.html.

Command and control

10. The SPLA has always had difficulties establishing command and control over recently integrated militia members, particularly when these still operate as a single unit led by a single commander. This has effectively been the case with the former SSLA fighters led by Major-General Matthew Puljang and fighters led by Major-General Johnson Olony prior to his defection to the SPLM/A in Opposition. Nevertheless, even though the SPLA Headquarters in Juba may have had limited effective control over tactical-level developments, the coordinated nature of the attack — involving multiple divisions across multiple sectors — indicates a high level of operational planning from Juba.⁷ In addition, the GRSS explicitly rejects the notion that it uses militias, claiming it only fights with its own trained soldiers and not alongside civilians.⁸ If this is the case, the SPLA is responsible for the conduct of its soldiers and commanders, as well as for guaranteeing the observance of human rights law and international humanitarian law by the forces under its control. It also is responsible for creating such conditions within the armed forces that human rights are respected, including through investigating allegations of abuse and if required, taking disciplinary action or starting criminal proceedings against individuals responsible or against commanders who have failed to exercise their command responsibility.
11. After reports on human rights abuses committed during the offensive surfaced, the government response was initially hostile. The Unity State government threatened to expel the UNMISS State Coordinator, and both the Presidential Spokesperson and the SPLA spokesperson denied the allegations. The government indicated the GRSS would issue a report of its own based on its own investigations.⁹ At the time of writing, the Panel was not aware of such investigations having started.

Conclusions:

12. This offensive was not only marked by allegations of rampant killing, rape, abduction, looting, arson and displacement, but by a new brutality and intensity, including such horrific acts as the burning alive of people inside their homes.¹⁰
13. The ferocity with which people were deliberately pursued — sometimes for days — into the swamps to kill them is particularly indicative of further escalation of the level of brutality and intensity of violence. These methods employed for fighting were aimed at annihilating SPLM/A in Opposition's support base, and led to a systematic destruction of villages and towns, forcing people into the PoC sites and creating an 'empty area' across the main

⁷ In principle, the rank of Major-General already confers upon Puljang significant autonomy to take decisions on operational matters, which clearly fall outside of the day-to-day responsibility of for example the SPLA Sector Commander in Wau or the General Headquarters in Juba.

⁸ Deutsche Welle, "South Sudan spokesman: 'Army didn't commit atrocities'" (22/07/2015). Via: <http://www.dw.com/en/south-sudan-spokesman-army-didnt-commit-atrocities/a-18601282>, accessed on 27 July 2015.

⁹ Ibid.

¹⁰ UNMISS Flash Human Rights Report. Ibid.

transport axes in Central and Southern Unity.¹¹ Another clear indication of this ferocity and brutality of violence is the large scale rape and sexual abuse of girls and women, including elderly women. Witnesses told the Panel how young girls were raped, often in front of their parents or community members, and then burned alive in their houses.

14. The Panel notes that, even if violence targeted against civilians is not new to the current war in South Sudan, this level of intensity and brutality in the Unity offensive most certainly is. According to UNMISS, the scope and level of cruelty that has characterized this offensive suggests a depth of antipathy that exceeds political differences.¹² The resulting ethnic tensions between Bul Nuer and other Nuer tribes inside PoC sites during the offensive is one clear indication of this ethnic dimension at play.
15. The Panel has written to the SPLA, requesting further information regarding these gross human rights abuses, as well as concerning the investigations it has initiated and is currently awaiting a reply. The Panel intends to further investigate individual responsibility on the one hand and superior or command responsibility on the other.

¹¹ This tactic is reinforced by the creation of 'safe zones'. The government calls upon the population to gather in such areas in which it then positions regular SPLA troops that pose less of a risk to the population, or to which people can safely bring their cattle. In addition it calls upon the international community to legitimise such areas by bringing food or other items into them, as well as provide other forms of support. Bentiu town became one of these areas, with tens of thousands of cows present — many of which were effectively stolen. The tactic has also been employed in Upper Nile State.

¹² UNMISS Flash Human Rights Report. Ibid.

Photographic evidence:¹³ The town of NGOP before and after the incident
Nhialdiu Market and hospital



¹³ Confidential sources — on file with the United Nations.

Leer Hospital



Annex VI

Current state of armed groups in South Sudan

1. When the Comprehensive Peace Agreement (CPA) was signed on 9 January 2005, approximately 20 armed groups were operating throughout the country independent of the official forces.¹ By December 2013, the number of significant armed groups in South Sudan had reportedly been reduced to fewer than five, as a result of a number of government-initiated reconciliation processes undertaken to integrate the armed groups into the SPLA, including the Juba Agreement of 8 January 2006. The only notable forces that remained outside of this process were the South Sudan Democratic Movement/Army-Cobra (SSDM/A-Cobra) under the command of Murle leader David Yau Yau, in southern Jonglei State, and the SSDM/A faction in Upper Nile State under the command of Shilluk leader Johnson Olony.
2. Though amnesty and integration into the SPLA had helped to diminish the near-term threat several militias posed to the consolidation of state control, the drivers of insurgency were neither comprehensively assessed nor systematically addressed. Perceived political and economic marginalization, as well as general socio-economic underdevelopment and disappointment with the authorities in Juba fuelled simmering grievances on the periphery, in particular on the Ethiopian and Sudanese borders.
3. The leadership crisis, including within the state's security system, that began unfolding in mid-2013 revived these animosities and added an explosive ethnic dimension — historically the basis for the emergence of an armed group in South Sudan — to the underlying contest for power. The 15 December 2013 events in Juba that sparked the current war then expedited the consolidation of the forces opposed to the government on an ethnic and clan basis.
4. The SPLA, which had not evolved into an integrated national security force after independence, effectively split into two singularly large parts. One of them, under the control of the former SSDF (which had been led by Riek Machar until 2000) and the commanders of the South Sudan Liberation Movement/Army (SSLM/A), including Peter Gadet, joined the opposition. Within a few days of the events in Juba, at least three SPLA division commanders defected, along with the vast majority of their troops. Many thousands of ethnic Nuer, Shilluk, Murle, and other non-Dinka civilians from various SPLA territorial formations joined them in the subsequent days and weeks, laying bare the internal weaknesses of the SPLA.
5. As result, the government of South Sudan has increasingly transformed the National Security Service from a conventional intelligence gathering and analysis agency into a fighting force. They have received extensive training and have been well equipped compared to the regular SPLA.² The service is

¹ Young, John — South Sudan Defence Forces in the Wake of the Juba Agreement (2007); Small Arms Survey HSBA Working Paper 1; pp. 42-48; Young, John — The Fate of Sudan, Zed Books (2012), pp. 54-61. Small Arms Survey, Annual Update (2007), pp. 340-344.

² See for example, Sudan Tribune, "S. Sudan graduates over 3,000 national security officers". The article mentions this is only one batch of three. Via: <http://www.sudantribune.com/spip.php?article54865>.

funded through the Presidential Office, which allows for limited transparency with regards to exact budget allocations, but which has seen its budget increase significantly (see also finance/natural resources section). The government has also strengthened and increasingly relied upon the Presidential Guard (SPLA Tiger Division), composed of Dinka from the home area of President Kiir.³

SPLM/A in Opposition

6. The splinter forces, which accounted by various estimates for at least one third of the entire strength of the SPLA before the December 2013 crisis, remain under the title of the SPLM/A in Opposition. The SPLM/A in Opposition retained the SPLA command and control structures, ranks and promotion system.
7. SPLM/A in Opposition forces are concentrated in the Greater Upper Nile areas populated by Nuer. In itself, this is a reflection of the ethnic element of the war, a factor that presents one of the most formidable challenges to ending the conflict. Nuer-populated areas are decisively supportive of the opposition throughout Jonglei, Unity and Upper Nile States. The fact that the largest defections from the SPLA came from Divisions VIII (Jonglei), IV (Unity) and VII (southern Upper Nile) since they were composed mostly of Nuer, deployed in the Nuer heartland, should be regarded as a further indication that the conflict is perceived at the grass-roots level as ethnically-based. It is also believed that several thousand Nuer defected from the South Sudan Police Service (SSPS) during the first few months of the war.
8. Traditionally, the former SSDF, SSDM/A and SSLM/A force commanders at all levels combine military command with community mobilization. All SPLM/A in Opposition senior commanders are now effectively able to mobilize the respective contingents of community militias amongst the Nuer population.
9. The SPLM/A in Opposition suffers from internal divisions over the conditions for entering into an agreement with the government, centred largely on whether any power-sharing arrangement could include President Kiir. This fragmentation recently became visible when Machar's senior military commanders sent a letter to IGAD informing them that no agreement that included both Kiir and Machar would be acceptable to them. In response, Machar sacked two of his senior commanders. This fragmentation will have a large impact on the ability of the SPLM/A in Opposition to enforce implementation of any peace agreement.

Tribal militias and local security arrangements

10. For generations, the security environment of vast areas inside South Sudan has been shaped by continuous inter-tribal competition for livelihoods emanating from the semi-nomadic and nomadic life-styles. Cattle-raiding, which dominates

³ The Presidential Guard played a crucial role in the fighting that erupted in Juba in December 2013, as well as the so-called "Mathiang Anyoor" militia that was subsequently integrated into the National Security Service.

the everyday life of numerous communities in Greater Bahr el-Ghazal and Greater Upper Nile areas, is the most obvious manifestation of this competition.

11. The most prominent group of tribal fighters known as the “White Army” is an agglomeration of tribal militia made up of Lou, Jikany and Gawaar Nuers. Their numbers are assessed randomly at 4,000 to 6,000, but it can swell to much larger numbers if broader security threats to the Nuer clans emerge, as is now the case.
12. The SPLA has purposefully used youth militia as part of its strategy in Unity and Upper Nile State, while the youth groups themselves use the chaos and the cover of acting on behalf of the Government to steal cattle, plunder and attack rival ethnic groups. Local authorities and traditional leaders in most cases are unable to provide the oversight required to keep the activities of the militias within the customary law, including compensation and broader accountability. Outside of areas of direct hostilities between SPLA and SPLM/A in Opposition, the lack of both state capacity and willingness to provide security also leads to increasing violence.

Non-indigenous armed groups

13. The non-indigenous armed groups, including the Sudanese Justice and Equality Movement (JEM) and the Ugandan Lord’s Resistance Army (LRA), have operated within South Sudan since 2010 and 2002, respectively. Since the beginning of the war, JEM has been reported to participate in the security operations in Unity State on the side of the SPLA. During its July visit to Bentiu, the Panel witnessed undisguised movement of the JEM fighters around the city.

The armed groups presence in different States of South Sudan

14. In Jonglei State, the area of SPLM/A in Opposition control has been gradually shrinking, as the SPLA continued to launch and sustain security advances in southern Jonglei, near Bor, and from the neighbouring Lakes and Warrap States. Opposition control is most extensive in Upper Nile State. The SPLM/A in Opposition regular forces, as well as “White Army” formations of Gajok and Jikany Nuers, have been critical to the opposition’s ability to sustain effective control of these areas. Despite continued fighting, since January 2014, the area of control in Upper Nile has not changed appreciably. After the defection of Shilluk militia leader Johnson Olony from the SPLA, Upper Nile has effectively split into three zones based largely on ethnicity. The state capital Malakal and the strategic Dolieb Hill continue to change hands, and the opposition has on multiple occasions attempted to take the oil fields in Paloich as shutting down oil production in this area would starve the government of any revenue.
15. The opposition in Unity State has been not as successful in maintaining territorial and political control. The decision of the SSLM/A to support the government split the Bul Nuer community, and many Bul Nuer were rewarded by being given senior positions in the government of Unity State, including the governor and the deputy governor posts. The SPLM/A in Opposition military presence in Mayendit, Koch and Mayom Counties seems to have been degraded by the major offensive of the SPLA and allied Bul Nuer militias that

started in April 2015. IO repositioning and resupplying is now believed to take place through the border areas of Sudan.

16. The SPLM/A in Opposition has allied forces in Northern Bahr el-Ghazal State congregated around former SPLA Major-General Dau Aturjong, the most prominent Dinka member of the opposition. An appreciable number of Aturjong fighters hail from the “*gulweng*” ranks — armed Dinka militia composed mostly of underage youth. These were left out by the mobilization drive in 2012-2013 organised by Gen. Paul Malong Awan, the former governor of the state and the current chief-of-staff of the SPLA. Aturjong’s forces have not attacked the SPLA installations. They have engaged, however, in low intensity skirmishes near Kwajok in the Northern Bahr el-Ghazal and around Wau, Western Bahr el-Ghazal.
17. The political crisis in Juba and the resultant violence also led to the defection of thousands of Nuer from Divisions III and V deployed in the Greater Bahr El Ghazal area, particularly after the so-called “Mapel massacre” on 25 April 2014.⁴ Protracted non-payment of salaries to the military stimulated the defections. Many defectors who did not want to participate in the war against the SPLM/A in Opposition first crossed into neighbouring Sudan and then returned to Southern Sudan, aligning themselves with the Aturjong rebellion.
18. In Western Equatoria State, the sporadic attacks on the SPLA-protected camps of the Dinka cattle herders from Jonglei and Lakes States coincided this year with attacks on the SPLA military convoys, in particular in the Mundri West and Mlovo Counties. The government forces answered by targeting civilians, which led to the displacement, during May 2015, of up to fifteen thousand people, mostly Mundaris. Similar developments have taken place in Maridi County.
19. In Eastern Equatoria State, the population and local authorities are apprehensive about the government’s efforts to recruit the Equatorians for the ongoing conflict in the Greater Upper Nile. Clashes between local Topoza and Turkana militias and the SPLA have been reported since last year.⁵
20. In Central Equatoria State, the Governor, Mr. Clement Wani Konga, is believed to be in control of about several thousand-strong Mundari militia deployed there as well as in neighbouring Western Equatoria State. In his recent public statements, Governor Konga openly criticized the governance methods of the national authorities. The governors of Eastern and Western Equatoria have expressed similar criticism in public.⁶

⁴ See: South Sudan National Advocacy Group — Statement dated 28 April 2014, at www.southsudannewsagency.com.

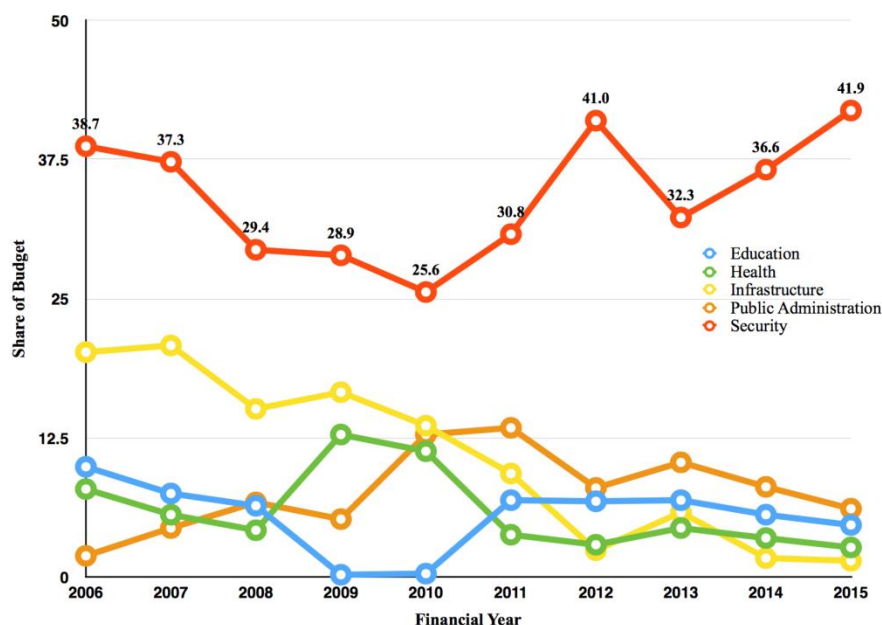
⁵ See: IRNA report on ADRA rapid needs assessment in Mundri West County, Western Equatoria State, from 5 to 10 June 2015.

⁶ See: Top Equatorian rebel leader slams governors’ stance on federalism — in: Sudan Tribune, 23 February 2015.

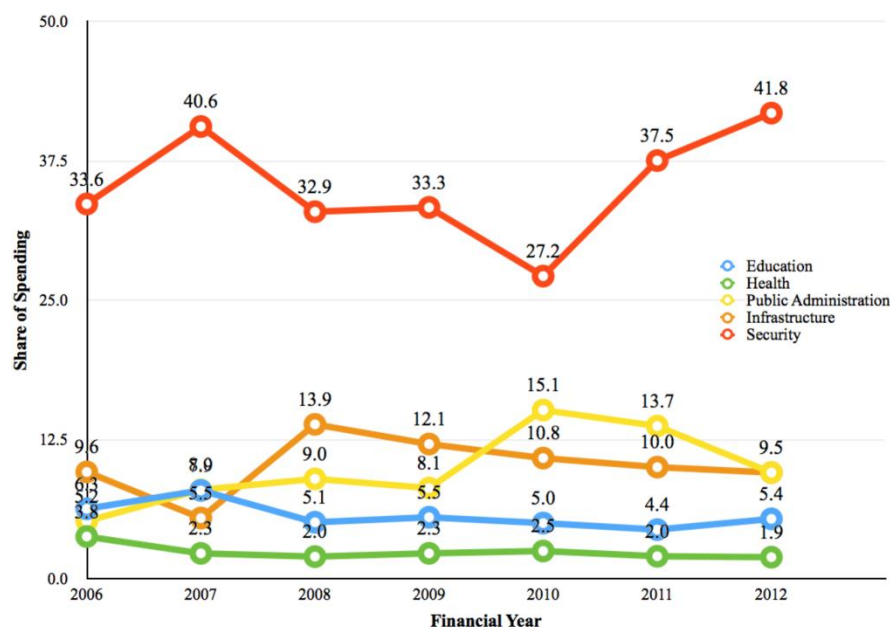
Annex VII

Percentage budgetary allocation by sector

(i) Share of approved budget

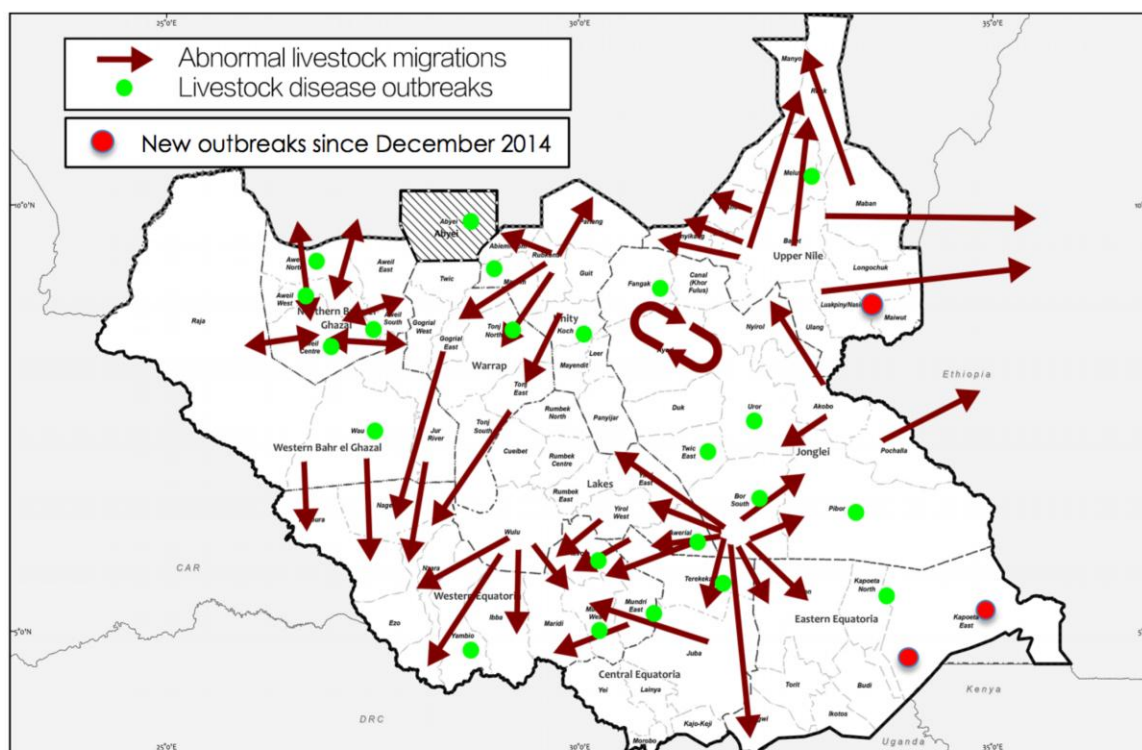


(ii) Share of Actual Spending



Annex VIII

Disruptions in livestock migrations



Annex IX

Section of captured cattle brought to Bentiu in mid-June



Annex X**SPLM/A in Opposition fighters in Bentiu loot a slain SPLA soldier on 5 May 2014¹**

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=9RuiiAa1WpY>.

Annex XI

Analysis of photographic evidence of Mil Mi24 helicopter flying the South Sudanese flag

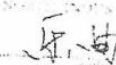


The Mi-24V is externally similar to earlier Mil Mi-24D but normally fitted with Anti-Tank Guided Missiles (ATGMs) on 'H' shaped missile rails on end of stub wings (see photograph in picture in main body of text) and has a modified radio guidance pod which is more streamlined. However, image below of a South Sudan Mil Mi-24 shows an aircraft that appears to be converted from a Mi-24K (camera recce version) with the under nose camera removed which leaves a distinctive bulge on the starboard side of the nose (yellow circle). Without sights, the helicopter cannot fire ATGMs from the H-shaped rails visible on the picture in text above. This can indicate that South Sudan is in possession of two different types of Mil Mi-24 helicopters. It is unlikely that new Mil Mi-24K helicopters, designed specifically for reconnaissance purposes, have undergone modular refitting of the kind visible on the picture prior to delivery, making it likely that this helicopter is not newly acquired by South Sudan.

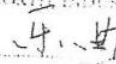
Annex XII

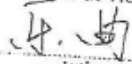
**Documentation concerning shipment of arms, ammunition,
and related materiel from Norinco to the Ministry of
Defence and Veterans' Affairs, June 2014**

(Contract number circled in yellow)

CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION (NORINCO) 12A GUANG AN MEN NAN JIE, BEIJING, P. O. BOX 2932 CHINA TEL.: 0086-10-63918821/05 FAX:0086 10 63947579		商业发票 COMMERCIAL INVOICE		
TO MINISTRY OF DEFENCE AND VETERANS' AFFAIRS, JUBA, THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN TEL.: +211956943333. /+211955022164				
Transport details From: DALIAN PORT, CHINA VIA: MOMBASA PORT To: JUBA, THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN		No. 0140502	Date 05.08.2011	
		S/C No. MOD 001/2011	L/C No.	
		Terms of payment T/T		
Marks & Numbers	Number and kind of packages, Description of goods	Quantity	Unit Price	Amount
MOD 001/2011 CIF MOMBASA PORT				
GOODS AS PER CONTRACT NO. MOD 001/2011				
9.		100PCS	USD18,000	USD1,800,000.00
		10SETS	USD12,000	USD120,000.00
		9PCS	USD58,000	USD522,000.00
		200PCS	USD800	USD160,000.00
10.		1SET	USD2,090,800	USD2,090,800.00
2 2.		1200RDS	USD9,000	USD10,800,000.00
		3145500RDS	USD0.15	USD471,825.00
TOTAL FOB DALIAN PORT AMOUNT				USD18,981,125.00
PLUS SEA FREIGHT AND INSURANCE PREMIUM:				USD1,753,500.00
TOTAL CIF MOMBASA PORT AMOUNT				USD20,734,625.00
MINUS 30 PCT ADVANCE PAYMENT:				USD6,221,377.50
TOTAL 70 PCT CIF AMOUNT PAYABLE:				USD14,513,247.50
SAY USD FOURTEEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY SEVEN AND 50/100 ONLY				
TOTAL NUMBER OF PACKAGES: 3816 CASES GROSS WEIGHT: 168060KGS				
For and on behalf of CHINA NORTH INDUSTRIES CORP.  Commercial Signature				

PAGE: 1 / 1

P.O. BOX 2932 CHINA TEL: 0086 10 83918821/05 FAX:0086 10 63547579		装箱单 PACKING LIST			
TO MINISTRY OF DEFENCE AND VETERANS' AFFAIRS, JOHA, THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN TEL: +211956943333/+211955022161		Invoice No. 0140502		Date 05.08.2014	
Marks & Number	Number and kind of packages, Description of goods	Quantity	Package	Gross Weight (KGS)	Measurement (cm)
MOD 001/2011					
GOODS AS PER CONTRACT NO. MOD 001/2011					
	RU-730 ANTI-TANK WEAPON SYSTEM	100PCS	50CASES	3500KGS	78*63*89
	RU 730 LAUNCHING DEVICE & GUIDANCE SYSTEM	100PCS	100CASES	1200KGS	81*63*10
	RU 730 FIRST ECHOLON TESTER	100PCS	10CASES	400KGS	70*67*27
	RU-730 TRAINING SIMULATOR	9PCS	9CASES	50KGS	62*58*51
			9CASES	141KGS	92*73*14
	RU-730 BATTERY	260PCS	9CASES	495KGS	72*70*66
	RU 730 SPARE PARTS	1SET	13CASES	355KGS	85*69*17
			30CASES	1240KGS	91*63*10
			115CASES	2615KGS	76*72*21
			50CASES	3500KGS	78*63*59
			50CASES	4500KGS	78*63*59
			70CASES	1470KGS	81*63*10
	10. TYPE RU-730 ANTI TANK MISSILE	1200PCS	1CASE	50KGS	75*58*11
			1200CASES	15000KGS	124*35*10
	2.2. 7.62*39MM BALL TYPE 30	3113500RDS	3CASES	210KGS	79*56*12
			2097CASES	62910KGS	17*31*14
TOTAL			3816CASES	131200KGS	362.01M ³
ALL THE CARGO ABOVE ARE LOADED IN 16*20' CONTAINERS, TOTAL WEIGHT IS 168000 KGS, TOTAL VOLUME IS 532.116 M ³					
For and on behalf of: CHINA NORTH INDUSTRIES CORP.  AUTHORIZED SIGNATURE					

P. O. BOX 2532 CHINA TEL: 0086-10-83918821/05 FAX:0086-10-63547579		装箱单 PACKING LIST			
TO MINISTRY OF DEFENCE AND VETERANS' AFFAIRS. JUBA, THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN TEL: +211956943333./+211955022164		Invoice No. ZH040512		Date 05.12.2014	
Marks & Number	Number and kind of packages; Description of goods	Quantity	Package	Gross Weight (KGS)	Measurement (cm) /Volume (M ³)
N001/2013 GOODS AS PER CONTRACT NO. MODVA/001/2013					
A2-1.	7.62MM AUTOMATIC RIFLE TYPE 56	9574PCS	958CASES	68431KGS	165.70
A2-2.	ADD-ON 40MM GRENADE LAUNCHER	2394SETS	120CASES	7200KGS	30.16
a2.	7.62X54MM BALL TYPE 53	2000000RDS	2000CASES	56000KGS	47.94
a3.	9X19MM PISTOL AMMO	2000000RDS	928CASES	29696KGS	19.28
A3.	TYPE 80 GENERAL PURPOSE MG	319PCS	319CASES	16907KGS	81.82
A1.	NP42 9MM PISTOL	660PCS	32CASES	1185KGS	1.59
a1.	7.62X39MM BALL TYPE 56	2000000RDS	13334CASES	400020KGS	308.07
a7-1.	40MM ANTI-PERSONNEL GRENADE TYPE BGL2	20000RDS	400CASES	8400KGS	13.98
a8.	40MM HEAT ROCKET TYPE 69	40000RDS	6668CASES	186701KGS	181.10
TOTAL:			21760CASES	774816KGS	1152.94M ³
ALL THE CARGO ABOVE ARE LOADED IN 55*20' CONTAINERS TOTAL CARGO+CONTAINER WEIGHT:901346KGS TOTAL CARGO+CONTAINER MEASUREMENT:1815.00M ³					
For and on behalf of CHINA NORTH INDUSTRIES CORP.  Authorized Signature					

PAGE: 1/1

12A GUANG AN MEN NAN JIE, BEIJING, P. O. BOX 2932 CHINA
 TEL: 0086-10-63918821/05 FAX:0086-10-63547579

Consignee (Insert name, address and phone)

TO ORDER OF SHIPPER



中远海运股份有限公司
 COSCO SHIPPING CO., LTD.

FAX:86-20-87673787 TLX:440668 COSCA CN

Notify Party (Insert name, address and phone)

LOID INVESTMENTS LTD.
 JEWEL CENTRE P. O. BOX 41 JUBA
 AND MOD

BILL OF LADING

ORIGINAL

Vessel: PENG HUANG SONG V. 0035	Port of Loading: DALIAN PORT, CHINA
Port of Discharge: MOMBASA PORT	Number of Original B/L THREE
Description of Goods N/M	Gross weight/Measurement 3816CASES (IN 16x20' S. O. C.) 168060KGS 532.416M³

Particulars Furnished by Merchants

CONTAINER NO./SEAL NO.
 PCL GLBU2900660/C37309/600CASES
 PCL CCLU2706739/C37320/600CASES
 PCL UESU2115286/C37321/571CASES
 PCL CBHU3349750/C37322/505CASES
 PCL FSCU3458700/C37323/145CASES
 PCL FSCU3221914/C37324/145CASES
 PCL CCLU2710111/C37325/145CASES
 PCL GVDU2009986/C37326/145CASES
 PCL FSCU399320/C37327/145CASES
 PCL FSCU3430370/C37328/145CASES
 PCL CCLU2697112/C37329/145CASES
 PCL PCLU2150627/C37331/145CASES
 PCL FSCU3441797/C37332/75CASES
 PCL FSCU3444590/C37334/75CASES
 PCL FSCU3451075/C37335/125CASES
 PCL CBHU3229224/C37337/89CASES

3816CASES
 (IN 16x20' S. O. C.)

168060KGS

532.416M³

GOODS AS PER CONTRACT DATED 03-APR-2013

TOTAL CARGO WEIGHT: 131260KGS
 TOTAL CARGO MEASUREMENT: 362.011M³
 CLEAN ON BOARD

SAY: THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTEEN CASES ONLY.
 (THE GOODS ARE SHIPPED IN SIXTEEN TWENTY-FOOT
 SHIPPER'S OWN CONTAINER)

(of which on deck at Merchant's risk; the Carrier not being responsible for loss or damage howsoever arising)

Freight and Charges

FREIGHT PREPAID

SHIPPED at the port of loading in apparent good order and condition on board the vessel for carriage to the port of discharge or so near thereto as she may safely get to discharge the goods specified above
 WEIGHT, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown
 IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said vessel has signed the number of Bill of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accepted the others shall be void

Place and date of issue: **DALIAN**

Signed for and on behalf of the Carrier:

For conditions of carriage see overleaf

Serial No. GZ 0026389
 (For Carrier's use only)

AS AGENT FOR THE CARRIER:
 COSCO SHIPPING CO., LTD.
 DALIAN SHIPPING AGENT

Annex XIII

Summary of emergency SPLA budget, January-June 2014

The Panel has obtained the full document, including individual line items for the Operations Group, Logistics Group, Administration Group, and Moral Orientation Group. For reasons of brevity these are withheld, but they can be obtained from the Panel by members of the Committee upon request. Although authentic in nature, the individual items mentioned have not necessarily been obtained by the GRSS. Other items the SPLA would not be in a position to obtain given their limited distribution or availability in countries unlikely to sell them. Neither would the SPLA be able to manage such items without the corresponding training in operating, maintaining, and repairing the equipment. Nevertheless, the Panel believes this budget provides an insight into the initial discussions surrounding the SPLA response to the crisis, in which from the beginning acquiring additional equipment as a means to militarily counter the loss of division-size formations to the SPLM/A in Opposition was tabled as a central policy option.

Summary of emergency budget (Jan-June 2014)

Matrix for Emergency Needs and Requirements

(Estimated cost in SSP)

A. Operations Group	
1. Artillery Unit	36.529.111,5
2. Armoured & Anti-Tank Unit	361.176.693,5
3. Air Defence Unit	14.432.405,3
4. Military Intelligence Unit	80.283.732,7
5. Medical Corp	22.777.380,0
6. Air Force Unit	60.630.440,4
7. Engineering Corp	44.534.255,9
8. Signal Corp	7.023.613,3
9. Commando Unit	5.754.086,6
10. Riverine Unit	6.500.112,2
11. Training Branch	6.531.668,4
12. Others	4.000.000,0
B. Logistics Group	
1. Arms & Ammunitions	815.038.680,9
2. Fuel and Lubricants	244.366.000,0
3. Transport & Maintenance	158.432.273,5
4. Food Rations	418.509.559,0
5. Uniforms	138.150.000,0
6. Ordinance	1.177.648,5
7. Others	77.066.472,0
Total	1.852.740.633,9

C. Administration Group	
1. GHQS Admin. Running Cost	7.000.000,00
2. Military Police	5.000.000,00
3. Force Control & Management System	12.000.000,00
4. Military Justice	2.523.698,40
Total	26.523.698,40
D. Moral Orientation Group	
1. Information & Media	1.650.000,00
2. Morale Orientation Works	2.100.000,00
Total	3.750.000,00
Grand total	2.533.187.831,99
